

de los derechos del trabajo

Boletín de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras colombianos / julio 2004 / N° 5

OBSERVATORIO

- Violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados colombianos en el 2004
- La coyuntura laboral en el 2004
- Violations of the Human Rights of Colombian Unionists in 2004
- The Labor Situation in 2004

Contenido

Violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados colombianos en 2004	1
La coyuntura laboral en el 2004.	8
Violations of the Human Rights of Colombian Unionists in 2004.	29
The Labor Situation in 2004.	36



Patricia Velásquez y Edwin Vélez, 2001

OBSERVATORIO
de los derechos del trabajo
Nº 5
Julio 2005



ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Calle 51 N° 55-78
Tel: 5133100 Fax: 5122330
Correo electrónico:
coddhlab@ens.org.co
A.A. 12175
Medellín-Colombia

Director de la ENS
Luis Norberto Ríos Navarro

Director Académico
José Luciano Sanín Vásquez

Coordinador
Área de Derechos Humanos
y Laborales
Juan Bernardo Rosado Duque

Coordinador
Área de Negociación
y Gestión Sindical
Héctor Vásquez Fernández

Fotografía portada
Patricia Velásquez
y Edwin Vélez, 2001

Este boletín se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la Escuela Nacional Sindical y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

Violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados colombianos en 2004

Una mirada global a lo acontecido durante 2004

Contrario a lo divulgado por el gobierno nacional, el año 2004 se ha constituido como el año de mayores violaciones en el quinquenio a los derechos de los sindicalistas en Colombia. La reiteración y gravedad de estos hechos corroboran que la crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que reafirma la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y el país real, donde se violan permanentemente los derechos de las y los sindicalistas.

Esta afirmación se soporta en los registros de violaciones, que pasaron de 626 en 2003 a 688 en 2004, significando un incremento en la violencia antisindical del 9,9%. Además, comparando los registros de los últimos cinco años, desde el 1º de enero del 2000 hasta el 31 de

diciembre del 2004, se puede establecer que las violaciones presentan un incremento total del 21,6%. La información sistematizada por el Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS muestra que en Colombia, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2004, se presentaron 688 casos de violaciones contra la vida, la libertad y la integridad personal de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados en el país. De estas violaciones, 445 registros corresponden a amenazas de muerte, 94 a homicidios, 77 a detenciones arbitrarias, 17 a hostigamientos, seis a desapariciones, cinco a secuestros, 33 a desplazamientos forzados y tres a allanamientos ilegales.

Este preocupante panorama de aumento de las violaciones de los derechos humanos reafirma y pone de relieve que la violencia contra los trabajadores sindicalizados se inscribe en un contexto de violencia sistemática, selectiva y extendida en el tiempo, que va dejando un prolongado rastro de impunidad que pareciera diluirse y ocultarse con el transcurso de los años y la superposición y sucesión de violaciones, relegando la obligación del Estado a situaciones contingentes cuya densidad y multiplicidad se convierten en escudos difuminadores de pasados recientes, donde la historia

pierde vigencia y la impunidad gana terreno.

El 2004 se inscribe en las lógicas de quince años de violencia sistemática cuya aparición se produce principalmente en los contextos de conflictos laborales: protestas por incumplimiento de acuerdos o negociaciones de los nuevos contratos colectivos laborales.

Dinámica de las violaciones

- Crecimiento del 9,9% en el total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en el país con respecto al 2003, pasando de 626 violaciones a 688 en el 2004.
- Un incremento del 3,29% en los homicidios contra sindicalistas con respecto a 2003, lo que equivale a tres casos más registrados durante el 2004.
- Un incremento del 50,33% en las amenazas contra sindicalistas, es decir 149 registros más que en el año 2003.
- Un incremento del 16,6% en las desapariciones forzadas; esto es, seis registros más que en el 2003.
- Un aumento del 57,14% en las detenciones arbitrarias, pasando de 49 registros durante el 2003 a 77 en el 2004.
- Un aumento del 21,42% de las violaciones por parte de la fuerza pública. 85 casos son señalados como responsabilidad de los organismos estatales (Ejército, Policía, DAS); en el mismo período del 2003 se registraron 70 violaciones con presunta responsabilidad de organismos del Estado.
- Un aumento del 20,6 % en la violencia contra mujeres sindicalizadas, pasando de 194 casos de violaciones en el 2003 a 234 casos en el 2004.
- Un incremento del 15,6% de la violencia contra los trabajadores sindicalizados del sector educativo, situación que ubica a los

trabajadores de este sector como los más afectados por la violencia antisindical al punto que el 61,1% del total de violaciones se realiza contra ellos.

- Un aumento de la violencia antisindical y la violación a los derechos humanos contra trabajadores sindicalizados en los departamentos de: Antioquia, pasando de 57 violaciones en el 2003 a 153 en el 2004; Valle del Cauca, que pasa de 40 casos registrados a 89; Atlántico, que pasó de diecisiete registros a 78; Tolima, de trece registros a 43; Bolívar, de nueve registros a 43; Sucre, de nueve a 78; y Norte de Santander, donde se pasó de nueve registros en el año 2003, a doce en 2004.
- Un incremento del 155,5% de las violaciones contra las organizaciones sindicales del sector agrario confederadas en Fensuagro, pasando de dieciocho registros de violaciones en el 2003 a 46 en el 2004.
- Un decrecimiento de los atentados contra trabajadores sindicalizados de un 70%, pasando de veinte casos en el 2003 a seis en 2004.
- Un decrecimiento del 75% en los allanamientos ilegales, pasando de doce registros en el 2003 a tres en el 2004.
- Un decrecimiento del 28,57% en los secuestros ocurridos durante 2004, pasando de siete registros en el 2003 a cinco en el 2004.
- Un decrecimiento del 18,4 % en las violaciones contra dirigentes sindicales en el país.

Tendencias y rasgos relevantes en 2004

En este contexto, es significativo resaltar algunos aspectos que marcaron el panorama general de las violaciones en el 2004, año en

el cual las amenazas de muerte, las violaciones contra el sector educativo y agrario, las violaciones contra mujeres sindicalizadas, la responsabilidad estatal en las violaciones y el sostenimiento histórico de la impunidad, configuran la cartografía de las violaciones contra los trabajadores sindicalizados en el país.

Amenazas contra líderes sindicales

Las amenazas de muerte realizadas contra trabajadores sindicalizados de forma individual y selectiva constituye, sin lugar a dudas, la situación más crítica en el panorama de violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores durante el 2004. El acelerado crecimiento, pasando de 296 casos registrados durante el 2003 a 445 en el 2004, lo cual equivale a un incremento del 50,8%, refleja la agudización de la violencia en el país contra los trabajadores y pone de relieve la pérdida de garantías para el ejercicio de la actividad sindical y la fuerte cultura antisindical que se ha promovido con especial énfasis en el gobierno del presidente Uribe y su política de seguridad democrática, al encontrar en los trabajadores fuertes oponentes para su libre implementación. Dicho argumento es la base general del mayor número de amenazas proferidas contra altos dirigentes y activistas sindicales por parte de los grupos paramilitares.

Crece la persecución contra los trabajadores agrícolas

La persecución contra los trabajadores agrarios en el país posee rasgos históricos en la trama de violaciones contra el movimiento sindical. Sin embargo, durante el último gobierno esta violencia se ha dirigido sistemática y reiterativamente contra los trabajadores afiliados en la Federación Nacional Sindical Unitaria

Agropecuaria, Fensuagro. Según información del Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS, el 47% de las detenciones arbitrarias están dirigidas contra los trabajadores del sector agrícola. La situación más grave la viven los sindicalistas agrícolas de los departamentos de Sucre, Tolima y Arauca, quienes cotidianamente son víctimas de detenciones masivas, de montajes judiciales y de asesinatos de sus principales líderes. A esto se une el hecho de que hoy la dramática situación de los trabajadores campesinos es quizás una de las más invisibilizadas en el panorama general de violaciones.

Violaciones contra el sector educativo

La situación de los docentes en Colombia es otro rasgo particular de la violencia contra los trabajadores sindicalizados en el país, constituyéndose como el sector sindical más afectado por las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad en el movimiento sindical. Durante el año 2004 los maestros y trabajadores de instituciones universitarias han sido víctimas del 61,1% del total de violaciones contra los trabajadores sindicalizados. En este contexto de violaciones es necesario resaltar que 48 han sido asesinados, lo que representa un 51% del total de los homicidios; 320 han recibido amenazas de muerte, treinta han tenido que desplazarse forzosamente, catorce han sido víctimas de detención arbitraria y cinco han sido desaparecidos. De este preocupante panorama es también necesario señalar que de los 48 trabajadores del sector educativo asesinados en el país, 38 docentes se encontraban afiliados a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, diez de las víctimas eran afiliadas a los sindicatos de profesores y trabajadores de la educación superior y trece eran mujeres sindicalizadas. Además, según información del Ob-

servatorio de Derechos Humanos¹ de la Vicepresidencia de la República y de la Policía Nacional, durante el 2004 fueron asesinados 63 educadores (información que no discrimina afiliación sindical), presentando un incremento del 54% con respecto a 2003.

Aumenta la estrategia de terror contra las mujeres sindicalizadas

La estrategia de terror contra las mujeres sindicalizadas en el país aparece quizás hoy como uno de los rasgos más particulares en el actual panorama de violaciones a los derechos humanos contra los trabajadores sindicalizados. En el informe del 2003 registrábamos con preocupación un incremento del 600% de las violaciones a la vida, la integridad y la libertad, con respecto al 2002; para este año se registra un aumento del 20,6%, sosteniendo su ruta ascendente. La información registrada en el Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS nos muestra que durante el 2004 las mujeres han sido víctimas de dieciséis homicidios, 187 amenazas de muerte, ocho detenciones arbitrarias, dos allanamientos ilegales y dos hostigamientos. Es pertinente señalar que tradicionalmente la violencia antisindical contra las mujeres ha sido interpretada como un efecto colateral de la guerra, con excepción de las acciones realizadas contra mujeres de la alta dirigencia sindical. Las víctimas de esta violencia han sido observadas como víctimas de un conflicto armado indiscriminado o como víctimas accidentales de la violencia ejercida y dirigida contra el movimiento sindical. En este sentido, las cifras de violaciones contra mujeres en la mayoría de los casos, han sido desestimadas y aparecen como incipientes frente a

la totalidad de violaciones dirigidas contra los líderes o dirigentes sindicales masculinos. Sin embargo, más allá de las cifras registradas, es necesario revisar las violaciones contra mujeres en la simbología y en la fenomenología de los hechos y en las intenciones y lenguajes de sus victimarios.

Lo que se aprecia, en último término, en el aumento de la violencia contra las mujeres, es el desplazamiento de las violaciones hacia todo el núcleo familiar del trabajador o trabajadora sindical, algo que compromete además la integridad de las personas que no pertenecen al movimiento sindical. Con el incremento sustancial de las violaciones dirigidas contra las mujeres sindicalizadas es posible desestimar la tesis de víctimas colaterales, pues estos casos se introducen en la lógica de una violencia discriminada cuyos objetivos se sitúan más allá de la simple intención de silenciar a la víctima. Reflejan una finalidad simbólica y estratégica de inmovilidad y terror.

La responsabilidad estatal en las violaciones

Frente a la responsabilidad estatal en las violaciones de derechos humanos de los sindicalistas, además del prolongado e histórico rasgo de impunidad que ha acompañado las violaciones contra los trabajadores sindicalizados, es relevante señalar que en el 2004 la tendencia histórica de desconocimiento de los autores de los hechos violentos se mantiene. Precisamente, y en razón de esta tendencia histórica, en el 69,4% de los casos registrados, es decir 475, no se tiene conocimiento de los autores materiales ni intelectuales de los crímenes. En el 30,6% de las violaciones restantes (213 casos), en los que se posee información sobre

1. Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Derechos Humanos, preparado por la Vicepresidencia de la República, publicado en www.presidencia.gov.co.

los posibles autores, la información suministrada muestra que 105 casos son atribuidos a las autodefensas y/o paramilitares, 85 a los agentes estatales, trece a la violencia social y delin cuencial y seis a grupos insurgentes. Debemos destacar que la responsabilidad estatal se concentra en las detenciones arbitrarias, allanamientos y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra dirigentes sindicales en el departamento de Arauca.

Las “paradojas” estadísticas

La paradoja de los datos estadísticos o las estrategias técnicas para intentar presentar un avance en materia de derechos humanos, dada la supuesta disminución de las violaciones contra trabajadores sindicalizados, es otro de los puntos cruciales en el panorama actual de violaciones. En el informe ejecutivo sobre el balance anual de los derechos humanos, preparado por la Vicepresidencia de la República con motivo de la visita de la mesa de donantes, se señala con insistencia que gracias a la implementación de la política de seguridad democrática y a sus buenos resultados la violencia contra los sindicalistas ha disminuido en un 27%.² Señala además el informe en su cuadro comparativo de los años 2003 y 2004, sobre cifras de derechos humanos y resultados operacionales de la fuerza pública, que en el 2003 se produjeron 55 homicidios contra trabajadores sindicalizados y 40 en el 2004, presentando un descenso del 27%, y que en este mis-

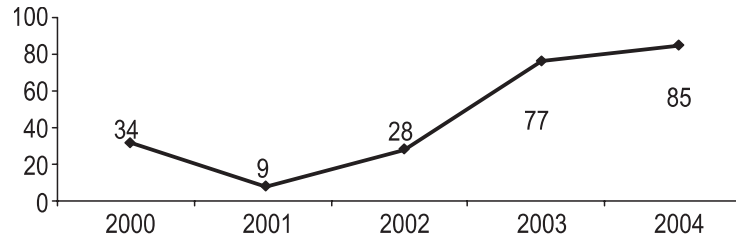
mo período se pasó de 41 homicidios contra maestros en el 2003, a 63 en el 2004, presentando un incremento del 54%.

Para la ENS dicho informe constituye un motivo de preocupación en cuanto el gobierno nacional ha divulgado con entusiasmo un descenso de los homicidios contra trabajadores sindicalizados como consecuencia de la implementación de su política de seguridad democrática, desconociendo del rango de trabajadores sindicalizados a los maestros, de quienes argumenta han sido víctimas durante el 2004 de un incremento del 54% en los homicidios. Como lo señalábamos anteriormente, de los trabajadores del sector educativo asesinados, 38 eran maestros sindicalistas pertenecientes a Fecode. Ahora bien, si a los 55 sindicalistas asesinados referidos por el gobierno nacional le sumamos los 38 educadores sindicalistas registrados por Fecode, constataríamos que no existe tal disminución y que contrario a los triunfalismos estadísticos, la situación de los sindicalistas en Colombia atraviesa por una crisis más grave que el año en comparación; además deja mucho que desear que se presenten los datos estadísticos por separado en cuanto a maestros y sindicalistas, como si dichas categorías fueran excluyentes, intentando presentar un avance en materia de derechos humanos, cuya afirmación es imposible de sostener con argumentaciones estadísticas aun cuando estas estén sigilosamente tratadas.

2. “En el marco del desarrollo de la política de seguridad democrática, también se destacan otros logros importantes durante 2004. Gracias a los programas de protección impulsados por el gobierno durante ese año el homicidio de sindicalistas registro una disminución de 27%...” Y más adelante continúa: “causa especial preocupación en el gobierno el incremento del homicidio de docentes en 2004, superior en un 54% en relación con 2003, aunque vale la pena resaltar la disminución del secuestro sobre este sector poblacional en un 37% y el hecho de que el 84% fue liberado y un 6% rescatado por la fuerza pública. En este tema de secuestro de docentes, 55% de los casos fueron realizados por las FARC, 26% por el ELN, y 7,5% por autodefensas o desconocidos.”

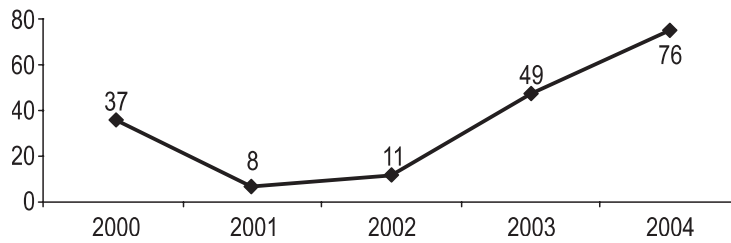
Gráficas y cuadros

Aumento de la responsabilidad estatal



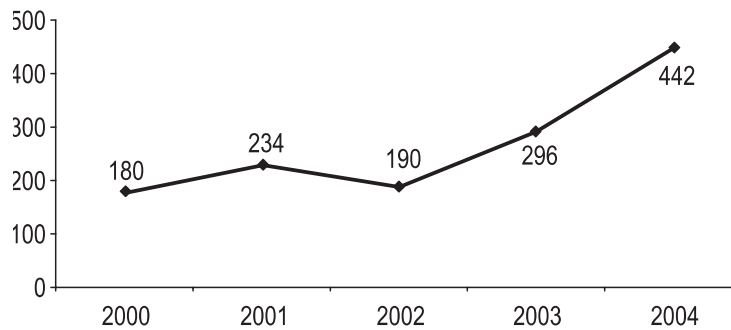
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Detenciones arbitrarias contra trabajadores sindicalizados del sector agrícola 2000-2004



Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENSI

Amenazas contra organizaciones sindicales y líderes sindicales



Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Total de violaciones contra el sector educativo. Enero 1 a diciembre 31 de 2004

Tipo de violación	Número de casos	Porcentajes
Amenazas	320	76,01
Atentados con o sin lesiones	1	0,24
Desaparición	5	1,19
Desplazamiento	30	7,13
Detención arbitraria	14	3,33
Homicidios	48	11,40
Hostigamiento	2	0,48
Secuestro	1	0,24
Total	421	100,00

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Presuntos Responsables. Total de violaciones contra trabajadores sindicalizados en Colombia. Enero 1 a diciembre 31 e 2004

Presuntos responsables	Número de casos	Porcentaje
Autodefensas y/o paramilitares	105	15,26
Organismos estatales	85	12,35
Empleador	4	0,58
Guerrilla	6	0,87
Delincuencia común	13	1,89
No identificado	337	48,98
Sin dato	138	20,5
Total	688	100,00

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

Total de violaciones a la vida, la integridad y la libertad de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados colombianos. Enero 1 a diciembre 31 de 2004

Violaciones	Número de casos	Porcentajes
Allanamiento ilegal	3	0,44
Amenazas	445	64,68
Atentado con o sin lesiones	6	0,87
Desaparición	7	1,02
Desplazamiento Forzado	33	4,80
Detención Arbitraria	77	11,19
Homicidios	94	13,66
Hostigamiento	17	2,47
Secuestro	5	0,73
Tortura	1	0,15
Total	688	100,00

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS

La coyuntura laboral en el 2004

1. La dinámica sindical en el 2004

El sindicalismo se moviliza contra la política económica y social del Estado

Entre los sectores sociales que más se movilizaron en Colombia durante el 2004 figuran en primer lugar los sindicatos. Otros sectores sociales que también lograron algunos niveles de movilización importantes, fueron, en su orden, los pequeños transportadores de carga, que por espacio de casi un mes paralizaron sus vehículos negociando condiciones de fletes más favorables; las comunidades indígenas, particularmente las del sur del país, que se han movilizado contra la violencia que sufren por causa de los diversos actores armados y contra las amenazas que sobre sus culturas y conocimientos ancestrales entraña la negociación del TLC; las organizaciones sociales de mujeres, que en las principales ciudades del país se movilizaron el 8 de marzo reivindicando sus derechos específicos y denunciando la discriminación, la desigualdad y la violencia a la que todavía son sometidas; las organizaciones que agrupan familiares de secuestrados y desaparecidos; algunos gremios de agricultores que se vieron afectados por políticas de importación de alimentos, como los arroceros y por las amenazas del TLC; y algunas comunidades barriales y de municipios, que se enfrentaron a situaciones del corte de sus servicios públicos esenciales, la reestructuración de sistemas masivos de transporte, el incremento desbordado de las

tarifas de servicios, o la imposición de peajes que incrementaban los costos del transporte.

En total, durante el 2004, se produjeron 91 movilizaciones y protestas sindicales,¹ significando un incremento de 9,63% con respecto al 2003, siendo un indicativo de lo que viene sucediendo con los derechos laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores colombianos. Este dato no incluye aquellas movilizaciones y protestas que se pudieron haber originado con motivo de negociaciones colectivas, con la excepción, por la magnitud y el impacto que tuvieron, de las que se produjeron alrededor de los conflictos colectivos en Ecopetrol y en la zona bananera de Urabá. La dinámica de la negociación colectiva se analiza en otra parte de este informe.

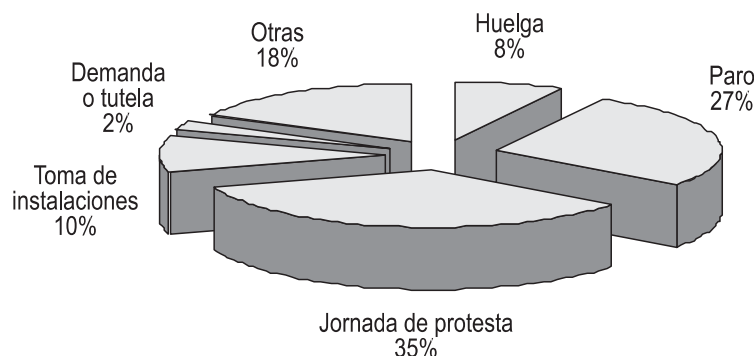
Las principales formas que asumió la movilización sindical fueron las jornadas de protesta (35%) y el paro (27%), lo cual indica la ausencia de mecanismos probados y legitimados de diálogo social que permitan un tratamiento adecuado de las problemáticas que dan origen a las acciones reivindicativas de los sindicatos.

Dentro de las formas de movilización que asumió la acción sindical, figuran también las tomas de instalaciones, 9,9%; la huelga, 7,7%; y "otras", 19,8%; entre las cuales figuran acciones en medio de negociaciones colectivas, la anormalidad en los horarios de trabajo, las operaciones reglamento, los mítines, las marchas, las acciones de solidaridad y las campañas a nivel local y regional.

1. Datos elaborados por la ENS con base en la actividad sindical registrada en la prensa a nivel nacional.

Gráfica 1

Actividad realizada



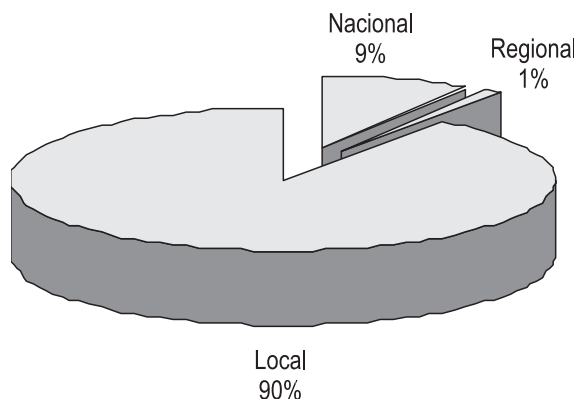
En cuanto a las jornadas de protesta, estas tuvieron la virtud de vincular a otros sectores sociales como los estudiantes, pensionados, madres comunitarias y comunidades barriales y populares; lo cual revela, en primer lugar, el tipo de problemáticas que reivindicaron los sindicatos: TLC, la defensa del Estado social de derecho, las reformas tributaria, pensional, judicial y laboral; la reelección presidencial; las privatizaciones; y en segundo lugar, la preocupación cada vez más extendida en los sindicatos de establecer una clara política de alianzas con otros movimientos sociales que les permi-

ta tener una mayor incidencia sobre las políticas públicas. Este último factor se refleja muy claramente en el lugar que ocupa el sindicalismo dentro de la Gran Coalición Democrática, que reúne diferentes sectores sociales y políticos, y cuya coordinación corresponde a la CUT a través de su presidente, el compañero Carlos Rodríguez.

En cuanto a la cobertura, aunque el 90% de las acciones sindicales tuvieron un carácter local, el resto se produjo en todo el país, demostrando con ello el avance en los procesos de articulación entre los sindicatos a nivel lo-

Gráfica 2

Cobertura de la Acción



cal, regional y nacional, y en una ocasión, a nivel subregional, con motivo de una protesta contra el TLC coordinada en los países del área andina por parte de las organizaciones sindicales de la subregión.

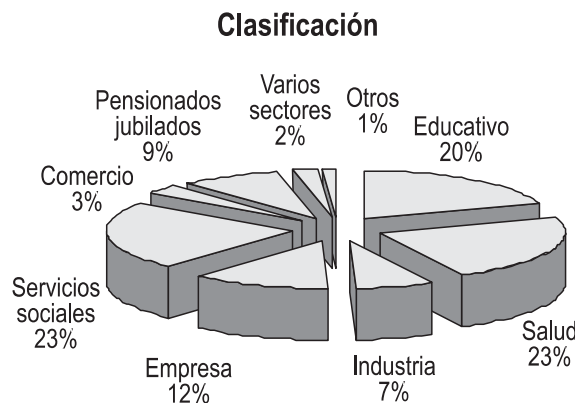
Dentro de las jornadas nacionales se destaca la del 12 de octubre que tuvo como ejes fundamentales la oposición a la reelección y la firma del TLC, la exigencia de una salida negociada al conflicto armado, la agenda legislativa y el respeto al Estado social de derecho.

El predominio de la movilización de carác-

ter local no significa, en modo alguno, la fragmentación de la movilización ni la atomización de los intereses, sino que refleja la importancia de problemáticas locales y regionales y su impacto en los derechos de estas comunidades, en particular entre los trabajadores y trabajadoras. Aquí se destacan los graves problemas que sobre el derecho a la salud afectaron a regiones como Santander y Caldas, y el impacto que tuvieron conflictos como el de USO/ Ecopetrol y Sintraemcali y las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Los sectores más afectados y los motivos de la protesta

Gráfica 3



Aunque cada sector vive una situación específica diferente, la mayor parte de los conflictos laborales que ocurrieron en el 2004 se explican por las políticas del gobierno encaminadas a reestructurar el Estado, las cuales debilitan su función social. Estas políticas privilegian la inversión de los recursos del presupuesto nacional para el pago del servicio de la deuda pública y para el financiamiento de la guerra; traslada al mercado y a los agentes privados la

prestación de servicios públicos que tienen relación con derechos económicos, sociales y culturales; acude al cierre o la fusión de entidades públicas para ahorrar recursos; recurre a la privatización de empresas estatales para subsanar o financiar el déficit del presupuesto y favorecer al capital privado; afecta los presupuestos de las entidades públicas que se encargan de la prestación de servicios esenciales para la población, afectando de paso derechos

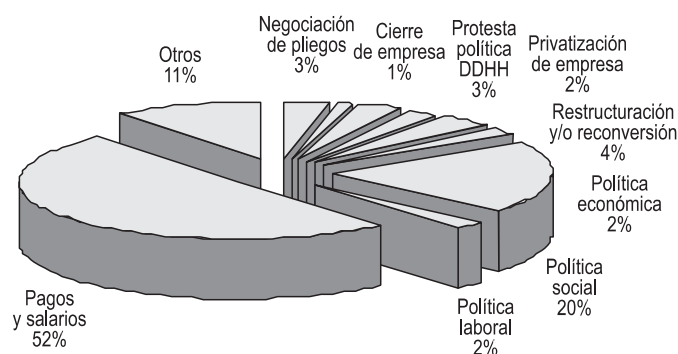
laborales y sociales de los trabajadores y trabajadores de estas entidades.

Finalmente, gran parte de la agenda legislativa promovida por el gobierno trae como consecuencia la afectación de derechos esenciales para la población, como la reforma pensional, o la reforma al sistema judicial, que restringen la utilización de la acción de tutela, limita las funciones de la Corte Constitucional y cercenan gran parte del contenido del Estado social y democrático diseñado a partir de la Constitución Política de 1991.

Y en el sector privado los procesos de reestructuración empresarial, que tienen como objetivo ganar competitividad sobre la base de disminuir costos laborales y precarizar las condiciones de trabajo, están conduciendo a una disminución acelerada de los ingresos de los trabajadores que incrementa las desigualdades en la distribución del ingreso, y que han hecho más precarias las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad sindical.

Gráfica 4

Motivo



En este contexto, los sectores sindicales más movilizadas en el 2004 fueron los de salud (23%), servicios sociales (23%), educación (20%) e industria (19%), otros (12%) y comercio (3%). Por su contenido, muchas de estas movilizaciones contaron con un fuerte apoyo entre los ciudadanos y ciudadanas y de otros sectores sociales (centrales obreras, estudiantes, madres comunitarias, padres de familia). Estas fueron las que tenían un contenido que trascendía las reivindicaciones tradicionales de los sindicatos, como aquellas que reivindicaban la

conservación del patrimonio público, la eliminación del proyecto de seguridad democrática, la reelección y la defensa del Estado social.

Aquí se haya el origen de conflictos como los que se presentaron en sectores de la salud (hospitales públicos departamentales, ISS...), la educación (SENA, Fecode), los servicios públicos domiciliarios (Sintraemcali), el sector energético (Ecopetrol, electrificadoras), el bancario (Bancafé), las comunicaciones (Adpostal, Inravisión) y otros.

En particular, en salud, la crisis de las redes hospitalarias locales y departamentales se agudizó como consecuencia del fracaso de la ley 100 de 1993, que privatizó salud, riesgos profesionales y pensiones y fortaleció los intereses privados que hoy controlan las EPS. La desarticulación del Instituto de los Seguros Sociales, la conversión en empleados públicos a la mayoría de los trabajadores de esta entidad, restringiendo el derecho a la libertad sindical; el cierre y reestructuración de hospitales públicos; la demora en pago de salarios y prestaciones sociales, el incremento en las cuotas moderadoras de salud; la falta de insumos para hospitales..., suscitaron importantes movilizaciones sindicales por parte de los trabajadores de la salud, especialmente de sindicatos como Anthoc y Sintraseguridad Social.

En este sector se destacaron las movilizaciones que realizaron los trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario Ramón González Valencia de Santander, que contó con el respaldo de las organizaciones estudiantiles de Bucaramanga, de la CUT y demás sindicatos de esta región y que alcanzó su mayor intensidad en la multitudinaria marcha que hicieron desde Bucaramanga hasta Bogotá para exigir una solución que permitiera la defensa de los derechos a la salud y al trabajo y evitara el cierre de este hospital.

En el sector educativo, fueron dos las principales causas de las protestas encabezadas por los sindicatos agrupados en Fecode: uno, el grave problema de desvío de recursos, ineficiencias en su aplicación y corrupción en el manejo de los mismos, que se presenta a nivel de las administraciones locales y regionales, afectando la calidad, la cobertura de la educación pública y la remuneración del personal docente a todos los niveles, en particular en la educación básica; estos recursos se vieron afec-

tados también por la política estatal que prefiere el pago de la deuda pública a las entidades privadas que el pago de la deuda social. Y dos, la imposición de un concurso de méritos que condiciona hacia el futuro el empleo de los educadores, reduce sus salarios, hace más precaria sus condiciones laborales y traslada, a plantas provisionales manejadas por la maquinaria clientelista de Uribe, a los docentes que no hayan participado en dichos concursos o que no hayan logrado los puntajes mínimos establecidos.

Las movilizaciones de los pensionados y jubilados tuvieron un importante significado en el 2004, motivadas por las pretensiones del gobierno de Uribe de modificar el régimen pensional vigente, con la intención fundamental de aliviar el déficit presupuestal a costa de recortarle ingresos a esta población, de afectar derechos adquiridos a quienes se encuentran en el régimen de transición establecido por la ley 100 de 1993 y de hacer más difícil el acceso a este derecho a los trabajadores actuales y futuros a través del incremento de la edad y del número de semanas cotizadas.

La reivindicación del pago de salarios, primas y prestaciones legales y convencionales ocupó un lugar destacado dentro de los motivos de la protesta y la movilización sindical (52%). Esta situación se presentó fundamentalmente en el sector público, (educadores, trabajadores de la salud, empleados y trabajadores oficiales de municipios y departamentos), afectados por los recortes a las transferencias que el Estado debe entregar a los municipios para educación y salud, por la crisis del sector hospitalario colombiano y los problemas de financiamiento, corrupción e ineficiencia en que se encuentran muchas de las entidades territoriales del país.

Finalmente, en el sector privado se presentaron tres conflictos colectivos que trascendieron de sus respectivos sectores: uno fue el que sucedió en la región de Urabá, donde Sintrainagro, el sindicato que agrupa al 98% de los trabajadores bananeros de esta región se vio obligado a realizar una huelga durante veinte días por la defensa del régimen convencional de contratación. Esta huelga logró no sólo la defensa de la convención colectiva de trabajo, sino el compromiso del gobierno y del empresariado de este sector de financiar un estudio que permita el establecimiento de un sistema de medición de precios, el mismo que estaría a cargo de la entidad estatal que se ocupa de construir estadísticas económicas y sociales: el DANE.

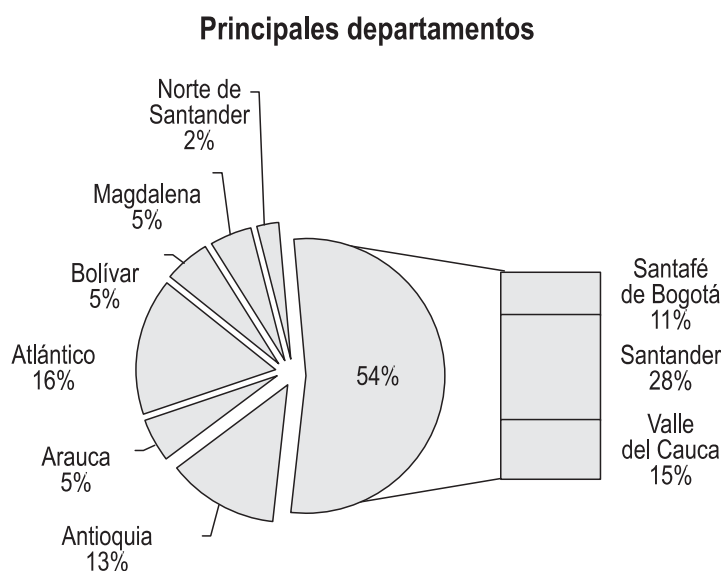
El segundo lo adelantaron los trabajadores de la multinacional Coca-cola agrupados en Sinaltrainal, los cuales vienen adelantando una

campaña internacional contra esta multinacional, que ha cohonestado con algunas de las gerencias de empresas subsidiarias suyas en la implementación de políticas antisindicales, que en algunos casos se ha expresado en el asesinato de directivos y afiliados al sindicato, en el cierre de factorías, el despido de trabajadores y en la negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por el sindicato. Estos últimos hechos obligaron al sindicato al adelanto de una huelga de hambre durante más de dos semanas en marzo del 2004.

Finalmente, fue notable también por el impacto que causó en el transporte aéreo, las “acciones reglamento” adelantadas por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, contra la empresa Avianca, que se negaba sistemáticamente a aplicar el convenio colectivo del trabajo en relación con los incrementos salariales.

Conflictos sindicales por regiones

Gráfica 5



En el 2004 el departamento de Santander fue la región donde más se presentaron movilizaciones y protestas sindicales (28%). En particular, los conflictos de la USO por la defensa de Ecopetrol como patrimonio público, y de su convención colectiva de trabajo, que lograron la movilización de sectores sindicales y populares en todo el país; y el suscitado en la ciudad de Bucaramanga contra el cierre del Hospital Universitario Ramón González Valencia. Estos conflictos ocuparon un lugar central

durante varios meses tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación.

Le sigue Atlántico (con un 16%) con diferentes conflictos educativos (Universidad del Atlántico, colegios públicos) y en salud (HUB, Hospital Pediátrico y Hospital San Francisco). Luego estuvo el Valle del Cauca (15%), donde se destaca el conflicto de Sintraemcali contra la privatización de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Cali. Le siguieron Antioquia (13%) y Bogotá (11%).

2. Balance de la negociación colectiva en el 2004

La contratación colectiva se marchita

Cuadro 1. Convenciones, pactos y cobertura de la contratación colectiva

	2000	2001	2002	2003	2004
Convención colectiva	491	328	492	173	434
Pacto Colectivo	153	149	204	110	192
Contrato Sindical	4	6	4	1	2
Total	648	483	700	284	628

Fuente: Ministerio de la Protección Social y datos de la ENS.

Respecto al 2002 la disminución del número de convenios fue de 72, sin embargo, en el 2002 se firmaron 35 convenciones colectivas que vencen entre el 2005 y el 2006, por lo que la disminución de los convenios colectivos en el 2004 respecto del 2002 fue de -5,56%. De todas maneras, aunque leve, esta disminución sigue la tendencia pronunciada hacia el debilitamiento de la contratación colectiva iniciada en los primeros años de la década de los noventa a raíz de la apertura económica surgida en esta década y de la imposi-

ción de la reforma laboral o ley 50 de 1990.

El mayor número de convenios colectivos correspondió a convenciones colectivas, 434, (69,1%), que son los que se celebran entre sindicatos y empresas. Le siguen los pactos colectivos, (forma de contratación colectiva en la que no participan los sindicatos), con 192 (30,57%), y en todo el año se presentaron tan sólo 2 contratos sindicales (0,31%).

Los sectores donde hubo mayor presencia de pactos colectivos fueron el de la industria manufacturera, con 98 casos (51,85% del total

de negociaciones en este sector); le sigue el sector de comercio y hoteles con dieciocho (37,5%); servicios comunales y sociales, con el mismo número de casos (21,68%), y el sector de agricultura, caza y pesca, con 40 casos (16,87%).

La figura del “pacto colectivo” se ha establecido en nuestra legislación como una su-puesta alternativa de “negociación” para los tra-bajadores no sindicalizados; sin embargo, en la mayoría de los casos no representa una ne-gociación real, sino que se impone desde arri-ba, y muchas empresas lo utilizan como una estrategia antisindical. Sobre este aspecto ya se ha pronunciado el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuando subrayó que “la nego-ciación directa entre la empresa y sus trabaja-dores por encima de las organizaciones repre-sentativas, cuando las mismas existen, puede en ciertos casos ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la ne-gociación colectiva entre empleadores y orga-nizaciones de trabajadores”.²

Negociación colectiva por actividad económica y trabajadores beneficiados por la contratación colectiva

El mayor número de convenios colectivos de trabajo se presentó en el sector de agricul-tura, caza y pesca, con el 37,73% del total. La importante participación de este sector en el total de la negociación colectiva se debe a la negociación de la región bananera de Urabá entre Sintrainagro y el gremio bananero.

En el sector manufacturero se presentaron 189 negociaciones, que representan el 30,09% del total; le sigue servicios comunales, sociales y personales, con 83 casos, el 13,21%; en este

sector se ubica la negociación colectiva de municipios y departamentos, de empresas de servicios domiciliarios, universidades y sector de la salud. En el sector de comercio y hoteles, que presentó 48 casos (7,6%), destaca la acti-vidad que desarrolla Sintrahocar, que en el 2004 negoció dieciocho convenciones colec-tivas.

En el sector de transporte y comunicacio-nes se presentaron diecinueve casos (3,02%), siete de los cuales son pactos colectivos; le si-guen el sector financiero con quince casos (2,38%) y, finalmente, minas y canteras con nueve casos (1,43%)

La negociación colectiva sigue siendo mar-ginal en nuestro país. En el 2004 sólo 134.244 trabajadores y trabajadoras se beneficiaron de algún tipo de convenio colectivo de trabajo. 87.290 por convenciones colectivas, 46.842 por pactos colectivos y 110 por contrato sindi-cal. Si a esta cifra le sumamos la cobertura del 2003 y la comparamos con la población ocu-pada, 17.578.000 personas en el 2004, la con-tratación colectiva sólo benefició al 1,17% de esta población.

Los sectores con mayor cobertura son el fi-nanciero, 11,57% y electricidad, gas y agua, con 8,95%, minas y canteras, 4,44% e indus-tria manufacturera con 2,67%.

Esta baja cobertura está relacionada con varios factores:

- La baja tasa de sindicalización (5,11%).
- La cultura y la práctica legal de sólo nego-ciar a nivel de la empresa y excluir la posi-bilidad de acuerdos a nivel de rama o sec-tor económico.
- Las políticas antisindicales implementadas desde el Estado y por el empresariado.

2. Recopilación de principios y decisiones del Comité de Libertad Sindical. Párrafo 786. 1996.

Cuadro 2: Convenios colectivos de trabajo por actividad económica y cobertura respecto población ocupada (17.578.000)

Sector	2002	Cobertura 2003	2004	Cobertura 2004	Población ocupada (miles)	Cobertura 2003-2004 %
1. Agricultura, caza y pesca.	33	3.732	237	29.649	3.683	0,9
2. Minas y canteras	10	7.200	9	1.645	199	4,44
3. Industria manufacturera	115	26.793	189	37.543	2.408	2,67
4. Electricidad, gas y agua	9	2.410	20	4.220	74	8,95
5. Construcción	5	392	8	1.302	785	0,21
6. Comercio, restaurantes y hoteles	38	3.817	48	10.633	4.400	0,32
7. Transporte y comunicaciones	10	2.264	19	13.519	1.205	1,31
8. Financiero	7	11.163	15	14.415	221	11,57
9. Servicios comunales, sociales y personales	57	14.493	83	21.323	3.834	0,94
Total	284	72.264	628	134.244		1,17

Fuente: Ministerio de Protección Social. Datos procesados por la Escuela nacional Sindical

- La violencia contra los sindicalistas.³
- La existencia de una legislación laboral que restringe el derecho a la libertad sindical.
- La flexibilización en la contratación de trabajadores para reducir costos laborales, a través de la implementación de contratos a término fijo, la subcontratación a través de terceros, el uso de cooperativas de trabajo asociado o de contratos civiles para eludir las obligaciones que entraña el contrato laboral.

Negociación colectiva y tribunales de arbitramento

Cuadro 3: Evolución de los tribunales de arbitramento 2000-2003

	2000	2001	2002	2003	2004
Casos	99	65	72	97	64

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

3. En el 2004 se presentaron un total de 688 casos de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de trabajadoras y trabajadores sindicalizados en Colombia, de este total el 13,66%, 94 casos, correspondió a homicidios. Ver "Informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos en el 2004", *Cuaderno de Derechos Humanos N° 15*, Ediciones Escuela Nacional Sindical, 2005.

Otra causa de esta disminución se produjo por los tribunales de arbitramento. Se convocaron 97 en el 2003 y la mayoría de ellos (74) en el sector público, muchos de ellos convocados por sindicatos minoritarios que no cuentan con otra alternativa para resolver el conflicto colectivo que se origina por la presentación del pliego de peticiones. De los 97 convocados en ese año sólo se concluyó en un arreglo en dieciocho casos, es decir, el 18,55%. Para el 2004 se convocaron 64 tribunales de arbitramento y de ellos sólo hubo arreglo en diez casos, es decir, el 15,62%.

Estos tribunales se han constituido en otro de los obstáculos para el avance de la contratación colectiva. Algunos sindicatos, particularmente en el sector público, se abstienen de iniciar procesos de negociación colectiva por el

temor a la facultad que la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado a los tribunales de arbitramento para revisar totalmente las convenciones colectivas, favoreciendo con ello las demandas de los empresarios en el sentido de desmejorar y/o suprimir derechos conquistados por los trabajadores.

Adicionalmente, el hecho de que sólo se resuelva de manera oportuna menos del 20% de los casos, indica que en muchas ocasiones la convocatoria a estos tribunales es utilizada como mecanismo de dilación por parte de las empresas, para presionar a los trabajadores a que se retiren del sindicato o a que acepten alternativas como el pacto colectivo, lo que implica también el abandono del sindicato y la desaparición de procesos reales de negociación colectiva.

La negociación colectiva en el sector público y privado

Cuadro 4. La negociación colectiva en el sector público y privado

Sector	Convenios colectivos
Nacional	7
Departamental	11
Municipal	29
Total Publico	47
Total Privado	581
Gran Total	628

Aunque la mayor proporción de sindicalizados se encuentran hoy en el sector público, la mayor parte de las negociaciones se presentan en el sector privado, 581 que representan el 92,51% del total, frente a 47 que se dieron en el sector público, es decir, el 7,48%.

Quienes negocian en el sector público son

los trabajadores oficiales de municipios, departamentos y empresas industriales y comerciales del Estado. La legislación colombiana introduce un principio de discriminación respecto a las funciones y derechos que puedan tener las organizaciones de los trabajadores del sector público en relación con el derecho a la

contratación colectiva, al clasificarlos entre “trabajadores oficiales” y “empleados públicos”.

El artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas. Esta disposición legal es contraria al Convenio

151 de la OIT de 1976, ratificado por el Congreso de la República a través de la ley 411 de 1997, que extienden el derecho de la contratación colectiva también a los empleados públicos, convenio que el Estado colombiano sistemáticamente se niega a aplicar.

Negociación colectiva por departamentos

Cuadro 5. Negociación colectiva por departamentos 2002-2003-2004

Departamento	2002	2003	2004	%
Antioquia	252	82	246	39,23
Cundinamarca	219	88	244	38,91
Valle	65	17	39	6,22
Santander	25	17	14	2,23
Bolívar	17	4	7	1,11
Boyacá	15	2	9	1,43
Magdalena	13	8	9	1,43
Atlántico	10	21	9	1,43
Quindío	11	3	1	-
Caldas	8	-	6	0,95
Tolima	8	9	6	0,95
Meta	8	2	6	0,95
Arauca	5	-	3	-
Risaralda	5	2	4	-
Huila	5	1	7	1,11
Cordoba	3	2	2	-
Casanare	3	2	1	-
Caquetá	3	-	1	-
Amazonas	2	1	4	-
N. Santander	2	1	4	-
Cauca	1	-	-	-
Nariño			1	
Chocó	1	2	-	-
Mocoa	1	-	-	-
Vaupés	-	-	1	-
Florencia	-	-	1	-
San Andrés	-	-	1	-
Sucre	-	-	1	-
Total	700	284	627	

Fuente: Minsiterio de la Protección Social.

Cerca del 80% de los casos de negociación colectiva se concentran en Antioquia y Cundinamarca, cada uno representando el 39,23 % y el 38,91% respectivamente. Le sigue Valle del Cauca con el 6,22%, Santander, Boyacá, Magdalena, Atlántico y Bolívar.

Negociación colectiva según clase de sindicato

La mayor dinámica de la negociación colectiva la tienen los sindicatos de industria con el 53,75% de los casos, le siguen los sindicatos de empresa con el 14,21% y finalmente, los sindicatos gremiales con el 0,49%.

Cuadro 6: Negociación colectiva según clase de sindicato

	2001	2002	2003	2004	%
Sindicato empresa	131	140	55	87	14,21
Sindicato Industria	176	336	114	329	53,75
Sindicato gremio	20	16	5	3	0,49

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

Esta situación contrasta con la estructura sindical que prevalece en Colombia, donde el 52,11% de los sindicatos son gremiales, la mayoría de los cuales no tiene como función principal la negociación colectiva, el 38,37% son de empresa, en tanto que los de industria constituyen el 8,92% del total.

Respecto de la dinámica que muestran los sindicatos de industria en relación con la negociación colectiva, ello no significa que en Colombia se presente la negociación colectiva a nivel de rama o sector económico; al contrario, la negociación colectiva se da en la mayoría de los casos en el nivel de la empresa, situación que contrasta con la de aquellos países donde el derecho de libertad sindical está pro-

tegido y estimulado por el Estado, en los cuales las negociaciones colectivas se presentan de manera simultánea, tanto a nivel de la empresa como de la industria o rama de actividad económica, y también a nivel nacional a través de los acuerdos interconfederales⁴ entre las organizaciones sindicales y de empleadores que sirven de base para el desarrollo de las negociaciones en los demás niveles.

En Colombia, si bien la legislación no incluye de manera explícita la posibilidad de negociar en niveles diferentes al de la empresa, sí obliga a los sindicatos de industria a actuar en la práctica como sindicatos de empresa, obstaculizando de esta manera la negociación sectorial y la libertad sindical.

4. En la página web de la UGT de España (www.ugt.es) encontramos la siguiente referencia al acuerdo interconfederal de 2005: "Los representantes de las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y de los sindicatos (UGT y Comisiones) han cerrado hoy el texto definitivo del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2005 (ANC 2005), que será ratificado oficialmente el próximo viernes por los máximos dirigentes de cada una de las organizaciones".

Negociación colectiva según confederaciones sindicales

Cuadro 7. Negociación colectiva según confederación o central sindical

Confederación	2002		2003		2004	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
CUT	266	38,00	70	24,65	282	44,90
CGTD	60	8,57	42	14,79	53	8,43
CTC	22	3,14	5	1,76	14	2,22
No confederado o sin dato	144	20,57	-	-	86	13,69
Total	700		284		628	

Fuente: Cálculos propios del Ministerio de la Protección Social con base en información suministrada por la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control del mismo ministerio. Elaboró Alfonso Riaño Barón.

Como corresponde a la estructura sindical del país, donde la mayor parte de los sindicatos están afiliados a la CUT, a esta central le corresponde el mayor número de convenciones colectivas, seguida por la CGT y la CTC. Llama la atención el alto número de negociaciones que se desarrollan por fuera de la influencia de las centrales sindicales que corres-

ponden a sindicatos no confederados.

Incrementos salariales

Como se observa en el cuadro 8, la mayoría de las negociaciones colectivas pactaron incrementos salariales que estuvieron por encima de la inflación causada en el año respectivamente anterior.

Cuadro 8: Incrementos salariales en la contratación colectiva

2003 (IPC causado nacional 6,49%)			2004, (IPC causado nacional 5,5%)		
Incrementos	Frecuencia	%	Incrementos	Frecuencia	%
Entre 1% y 5%	11	3,9	Por debajo del IPC causado (5,5%)	21	3,34
Entre 5,01% y 7%	107	37,7	Igual al IPC	9	1,43
Entre 7,01% y 8%	118	41,5	Entre 6% y menos de 7%	142	22,61
Entre 8,01% y 10%	41	14,4	Entre 7% y menos de 8%	180	28,66
			Entre 8% y menos de 9%	242	38,53
			Entre 9 y 10%	23	3,66
			Más de 10%	11	1,75
Total			628	100,00	
Entre 10,01% y 12%	6	2,1			
Más de 12%	1	0,4			

Fuente: Cálculos elaborados por la ENS sobre la base del listado suministrado por el Ministerio de la Protección Social y Seguridad (Unidad de Inspección, Vigilancia y Control).

Tradicionalmente en nuestro medio la negociación de los salarios sólo toma como referente el IPC causado. Todavía en la cultura de la negociación colectiva no se incorporan otros referentes, como pueden ser los del crecimiento de la productividad, que obligarían a una preparación mucho más técnica y profesional por parte de los sindicatos, a apoyarse en un mayor conocimiento sobre la situación financiera, económica y laboral de las empresas, de tal manera que les permita conocer su estructura de costos y la forma como las remuneraciones y los costos laborales totales impactan sobre ella.

Negociación colectiva según período de vigencia

Ha sido una tradición en la negociación colectiva pactar los acuerdos a dos años. Sin embargo, en los últimos años hemos venido observando una tendencia a pactar incrementos

mayores, de tres, cuatro y hasta más años. En parte, entre los sindicatos esta tendencia tiene que ver con la incertidumbre que generan los procesos de reconversión industrial y de reestructuración del trabajo y de las empresas, así como de los cambios que se han venido implementando desde el Estado en la política laboral, que llevan a los trabajadores a buscar una mayor estabilidad en relación con sus conquistas laborales; por parte de las empresas, esta tendencia puede explicarse en el afán de asegurar una mejor clima de trabajo que asegure que sus mejores cuadros se apliquen por entero a los asuntos propios de las empresas.

En el 2004, los datos del Ministerio dan cuenta de un total de 68 negociaciones colectivas (el 10,82%), que pactaron vigencias superiores a dos años: 46 pactaron vigencias de tres años, veintidós a cuatro años y en dos casos se pactó una vigencia de cinco años.

3. Reforma laboral y empleo

Cuando se presentó la reforma laboral, el gobierno en su exposición de motivos afirmaba que el aspecto más importante de la reforma estaría constituido por la creación de un sistema de protección social, “definido como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar calidad de vida, que permita obtener como mínimo los derechos a la salud, la pensión y el trabajo”.⁵

Frente al drama de 2.767.000 desempleados y en un contexto donde miles y miles de

trabajadores y de trabajadoras se encuentran excluidos del sistema de protección social, porque son trabajadores informales y no tienen cómo costearse los pagos a la seguridad social, o porque siendo asalariados, los empleadores eluden sus obligaciones laborales, –sólo venticuatro de cada cien personas ocupadas están afiliadas a un régimen de pensiones y en materia de salud, de cada cien trabajadores, 40 no tienen ninguna protección–, frente a este drama, repetimos, era y es absolutamente necesario que el país avance hacia

5. Ponencia conjunta proyecto de ley no 057/ 02 Senado y 056/02 Cámara.

un efectivo sistema de protección social. Sin embargo, no era éste, precisamente, el objetivo de la reforma, como se anticipó desde sus inicios por parte del sindicalismo y otros sectores democráticos del país, y como se puede comprobar ahora después de dos años de su aplicación.

Los contenidos de la reforma laboral y su impacto

La reforma aprobada comprendió cuatro módulos básicos: el primero establecía un subsidio para los afiliados a las cajas de compensación que perdieran su empleo, equivalente a un 50% del valor de un salario mínimo que se pagaría en bonos que dieran derecho a ciertos servicios de las cajas. El segundo incluía la creación de estímulos para la generación de empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas, consistentes en subsidios al empleo, recursos de crédito y exención de parafiscales para empresas que empleen personas vulnerables. En el tercero se acabó con el papel central que siempre ha tenido el SENA en relación con la formación para el trabajo, se suprimió el carácter laboral que tenía el contrato de aprendizaje y se establecieron unos cupos de aprendizaje obligatorios para las empresas. Finalmente, en el cuarto módulo se adoptaron medidas para disminuir costos laborales: se amplió la jornada de trabajo ordinario hasta las diez de la noche, se disminuyó el sobrecargo para el trabajo durante festivos y dominicales, y se redujo a la mitad la indemnización por despido sin justa causa.

El cuadro 1 elaborado por el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia (2005), nos permite visualizar en qué medida se han cumplido los presupuestos del gobierno y cuál es el verdadero impacto que la refor-

ma ha tenido luego de dos años de aplicación.

Sobre la primera parte de la reforma, la Superintendencia de Subsidio Familiar ha informado que en dos años se han entregado 65.462 subsidios, una cifra ínfima que representa muy poco (2,3%) en relación con el número de personas desempleadas, 2 millones 767 mil en todo el país.

Sobre la segunda parte, que incluía la creación de estímulos para la generación de empleo, los balances realizados coinciden en señalar los resultados bastante precarios que ha tenido esta parte de la reforma. En efecto, en relación con el universo de pequeñas empresas (43.242), medianas (8.041) y microempresas (967.315), aunque los programas de apoyo al empleo sólo se proponían como meta beneficiar 3.996 (!) empresas, apenas entregó 637 créditos, y el programa de subsidios a las empresas que generen empleos todavía no arranca.

Sobre la transformación que la reforma introdujo en el contrato de aprendizaje, los resultados son también bastante precarios, sobre todo para el segundo año que es cuando se deja notar claramente su verdadero impacto: para el 2003 se presentaron 59.615 aprendices adicionales, pero ya para el 2004 el incremento fue sólo de 2.187.

En relación con la utilización que se le está dando a este tipo de contrato, lo que desde el movimiento sindical se constata es que muchas empresas los están utilizando para reemplazar trabajadores y trabajadoras formales con costos superiores, como viene ocurriendo por ejemplo en el sector de la salud, donde enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería han sido reemplazadas con personal vinculado mediante la modalidad de contrato de aprendizaje establecido por la reforma laboral.

Cuadro 1. Estimaciones y logros de la ley 789: 2003 y 2004
Metas corregidas por apropiación de recursos⁶.

	Ejecución 2003 (1)	Impacto estimado a 2004 (2)	Comentario	Ejecución 2004
1. Ampliación jornada diurna		35.997 nuevos empleos	No hay información para verificar	
2. Reducción recargo trabajo dominical y festivo				
2 Reducción indemnización por despido sin justa causa.		54.997 nuevos empleos	La reducción de los costos de despidos no ha disminuido los costos laborales de manera significativa	
3. Regimenes especiales de aportes	0,3%		24 empresas y 146 trabajadores en 12-04	0,40%
4. Aprendices	89,0%	34.375 nuevos empleos	2.187 aprendices adicionales	3,70%
5. Fondo emprender	0,0%	59.615 aprendices adicionales	24 empresas y 146 trabajadores en 12-04	0,40%
6. Microcrédito para pequeñas empresas	2,0%	5.929 nuevos empleos	637 créditos asignados	15,90%
7. Subsidio temporal al empleo	0,0%	3.996 empresas	Empezó el 8 de mayo de 2004 y fue sujeto a revisión en enero de 2005	0,00%
8. Subsidio al desempleo a cargo de las CCF	43,0%	5.929 empleos	Hubo 124.914 solicitudes y se entregaron 65.462 subsidios	98,50%
9 Subsidio al desempleo a cargo del Estado	0,0%	66.444 personas	Ninguna información disponible sobre este programa	0,00%
10. Capacitación para inserción laboral (a)	78,0% (16,0%)		40.508 beneficiarios de la capacitación gratuita en las CCF	81,60% (64,25%)

(1) Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social (2004); (2) Fuentes: "Bases para el plan Nacional de Desarrollo 2002-2006", Superintendencia del Subsidio Familiar, Ministerio de la Protección Social (2004). (a) El primer indicador se refiere al número de beneficiarios, el segundo a la ejecución de recursos.

El impacto sobre el empleo

En relación con el impacto en la creación de nuevos empleos, los datos que proporciona el DANE no son muy favorables a la reforma. En efecto, aunque en el 2003 se presentó un repunte bastante significativo del empleo

respecto del año anterior, no hay que olvidar que veníamos de una situación de recesión de la economía bastante grave, con una caída del PIB en 1999 de -4%, situación que apenas empezó a recuperarse a partir del 2000.

Como se observa en el cuadro 2, el PIB pasó

6. "Mitos y realidades de la reforma laboral colombiana. La ley 789 dos años después". Cuadernos de trabajo N° 6, Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Universidad Externado de Colombia, 2005.

Cuadro 2: Comportamiento del mercado laboral 2002-2003-2004
promedio anual (en miles)

	2002	2003	Var. %	2004	Var.%
Crecimiento del PIB	1,93%	4,02%		3,96%	
Población total		43.134		43.860	1,68
Población en edad de trabajar	32.146	32.755	1,89	33.462	2,15
Población económicamente activa	19.656	20.345	3,50	20.325	-
Ocupados	16.711	17.467	4,52	17.578	0,63
Desocupados	2.860	2.878	0,62	2.767	-3,85
Subempleados	6.425	6.509	1,30	6.424	-1,30
Inactivos	12.489	12.410	-0,63	13.117	5,69
Población ocupada según posición ocupacional (miles, promedio anual)					
Obrero, jorn, y empleado particular	5.534	5.975	7,96	5.930	-0,75
Empleado gobierno	1.057	1.093	3,40	1.069	-2,19
Empleado domestico	865	879	1,61	820	-6,71
Cuenta propia	6.516	6.855	5,20	7.073	3,18
Patrón o empleador	825	819	-0,72	900	9,89
Trab.familiar sin remuneración y otro	1.822	1.846	1,31	1.786	-3,25

Fuente: DANE.

de 1,93% en el 2002 a 4,02% en el 2003. Este hecho tenía que impactar favorablemente sobre el empleo, independiente de que se hubiera hecho o no reforma laboral, como en efecto ocurrió al presentarse un incremento del 4,52% de los ocupados que, sin embargo, no alcanzó a disminuir el índice del desempleo que aumentó levemente en 0,62% en el mismo período.

Los datos del mercado laboral de 2004 nos muestran otra tendencia completamente diferente a la de 2003. En primer lugar, aunque se presentó una significativa baja del desempleo, -3,85% con respecto a 2003, sólo se generaron 111.000 puestos de trabajo, lo que ape-

nas representó un incremento del 0,63% en la tasa de ocupación. Este indicador se situó por debajo de los indicadores de crecimiento de la economía (3,96%), de la población (1,68%), y de la población en edad de trabajar (2,15%), lo que indica que no fue el mercado de trabajo el responsable de la disminución de la tasa de desempleo y menos una consecuencia de la aplicación de la reforma laboral.

¿Qué pasó entonces en el mercado laboral que nos permita explicar la baja del índice del desempleo sin una correspondencia con el incremento de la población ocupada?

Si en el 2004 el desempleo bajó 3,85%, y la población ocupada sólo se incrementó en

0,63%, la explicación más razonable a este fenómeno sólo puede estar en el comportamiento de la población inactiva, que de 2003 a 2004 se incrementó en 707 mil personas, que por diversas razones, —como pueden ser el incremento del número de estudiantes o de la población desempleada que se cansa de buscar un empleo digno— terminan siendo registradas por las encuestas en esta categoría ocupacional.

En segundo lugar, para el 2004 todos los indicadores que se refieren a trabajadores formales cubiertos por una relación de trabajo legal son negativos: el número de asalariados del sector privado disminuye en 0,75%; los empleados del gobierno también lo hacen en 2,19%; y lo mismo ocurre con las empleadas domésticas, que se reducen en 6,71%. Se supone que la reforma laboral tendría su aplicación fundamental sobre el sector formal de la economía ayudando a generar nuevos puestos de trabajo, o que sus políticas de promoción del empleo en los sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas, tendrían que reflejarse en un incremento de la población trabajadora regulada por una relación de trabajo formal. Sin embargo no ha ocurrido así, al me-

nos en el 2004, luego de que la economía superara la situación de recesión que se vivió hasta el 2000.

En tercer lugar, en el 2004 las únicas categorías ocupacionales que crecieron, fueron las de “trabajadores por cuenta propia” (3,18%), la mayoría de los cuales se ubican en el sector informal de la economía, al margen de la protección social y por fuera de la noción de “trabajo decente” promovida por la OIT, y la categoría de “patrón o empleador” (9,89%), que en muchas ocasiones esconde también, no a un propietario autónomo con capacidad de ganarse un sustento que le permita un nivel de vida digno, sino a un trabajador informal que se dedica al rebusque, como el que es propietario de una “chaza”, que se da a sí mismo ánimo contestando a las encuestas que él es su propio patrón y empleador.

A este respecto es bastante ilustrativo lo que ocurrió con el empleo en un sector como el manufacturero (véase el cuadro 3): la encuesta anual realizada por el DANE señala un crecimiento del empleo de apenas 0,44%. Sin embargo, el crecimiento de la producción real y de las ventas en el total de la industria fue de 4,87% y 3,54%, respectivamente.

Cuadro 3: Variación año corrido de la producción, las ventas y el empleo industrial.
Enero-diciembre 2004-2003

	Producción ^a		Ventas	Empleo Total		
	Nominal	Real		Total	Permanente	Temporal
a. Total con trilla	13,12	4,76	3,41	0,45	-1,94	4,04
b. Total sin trilla	13,04	4,87	3,54	0,44	-1,96	4,05

Fuente: DANE.

El comportamiento de este sector indica claramente cómo la reforma laboral resultó completamente inocua en la generación de nuevos puestos de trabajo: ante el incremento de la producción y de las ventas, lo que hicieron los empleadores del sector fue optimizar el uso de la capacidad instalada e incrementar la productividad del trabajo: aquí los supuestos estímulos que puede tener la reforma laboral para contratar nuevos trabajadores no han funcionado, pues con el mismo personal y la misma capacidad instalada se lograron mayores niveles de producción y de ventas. Habría que preguntarle a los empleadores de estos sectores cómo se repartió ese mayor valor agregado por

el trabajo y qué tanto este mayor incremento de la productividad y de la riqueza creada en este sector significó un mejoramiento real de la calidad de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadores vinculados a este sector.

La encuesta anual manufacturera del DANE nos deja ver también cuál es la calidad del empleo que se generó en este sector, que entre otras cosas, señala una tendencia común a todos los sectores. Como lo señalamos, el empleo industrial año corrido creció apenas 0,45%; de este total, el crecimiento de los empleos temporales fue de 4,04%, en tanto que los empleos permanentes disminuyeron en 1,94%.

Cuadro 4. Cooperativas de trabajo asociado constituidas ante la Cámara de Comercio de Medellín

Año	2001	2002	2003	2004 (a agosto)
Cantidad	40	48	64	40

También empíricamente se puede observar cómo muchas empresas están utilizando de manera fraudulenta a las cooperativas de trabajo asociado para subcontratar trabajadores y reducir costos laborales. Véase por ejemplo lo que está ocurriendo en todas las empresas del grupo Santodomingo que producen cerveza: la mayoría de los trabajadores antiguos fueron retirados con diversas prácticas legales e ilegales, los sindicatos fueron acabados o reducidos a su mínima expresión, la convención colectiva ya no se aplica o se aplica a muy pocos, y la mayoría de los trabajadores están contratados hoy a través de cooperativas.

¿Se debe mantener o no la reforma laboral?

Los objetivos que justificaron la expedición de esta ley fueron los de “apoyar el empleo y ampliar la protección social”, en un contexto de altos índices de desempleo y amplísimos sectores de trabajadores al margen de la seguridad social. Como ya lo señalamos, en el primer año de la reforma se presentó un incremento del 4,52% de los ocupados que no alcanzó a disminuir el índice del desempleo. Sin embargo, este crecimiento de los ocupados no fue resultado de la reforma laboral sino de la recuperación de la economía, como lo muestran los resultados del 2004.

Para el 2004 los indicadores de empleo que se refieren a trabajadores formales cubiertos

por una relación de trabajo legal resultaron negativos, las únicas categorías ocupacionales que crecieron, fueron las de “trabajadores por cuenta propia” y la de “patrón o empleador”, muchas de las cuales corresponden a trabajadores informales.

Por otro lado, la reforma tampoco ha tenido un impacto positivo en la formalización del

empleo, que era uno de sus propósitos (véase cuadro 4). Los pocos incrementos que se han tenido en relación con la afiliación a la seguridad social, están relacionados más con la recuperación de la economía y la generación de empleo que esta recuperación promueve, que con la reforma laboral misma.

Cuadro 5. Afiliación a la seguridad social por tipos de empleo en las trece áreas metropolitanas. Segundos trimestres de 2002, 2003 y 2004

Tipo de empleo	% Afiliado salud (régimen contributivo)			% Afiliado pensiones		
	Abr-jun 2002	Abr-jun 2003	Abr-jun 2004	Abr-jun 2002	Abr-jun 2003	Abr-jun 2004
A. Total ocupados	61,4	62,3	63,8	34,3	34,8	37,2
1. Sector formal	88,1	87,9	89,4	67,7	68,0	70,4
2. Sector informal	43,6	44,4	44,8	11,9	11,7	12,6
B. Obrero/Empl. Asalr.	76,4	77,9	79,1	57,2	57,7	60,7
1. Privados	73,4	75,2	76,8	51,8	52,7	56,4
c. Hasta 10 trabajad.	49,0	51,9	51,5	20,6	20,0	22,7
d. 11 + trabajad	88,7	88,9	90,6	71,4	72,1	74,8
2. Del gobierno	98,5	100,0	99,1	96,4	97,7	96,7

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, 13 áreas metropolitanas, segundos trimestres (con módulos de informalidad). Tomado de: *Impacto de la reforma laboral sobre la generación y calidad del empleo*, CIDE, 2005.

Respecto de la calidad del empleo que se está generando, es bastante ilustrativo el informe de la Superintendencia Bancaria acerca del grado de fidelidad de los afiliados a los fondos de pensiones: del total de afiliados, 49,9% son activos y 50,1% inactivos. Estos últimos son los que no han efectuado cotizaciones en por lo menos los últimos seis meses.⁷

La mayor eficacia de la reforma laboral, y tal vez la única, ha sido disminuir los costos

laborales y empobrecer a los trabajadoras y trabajadores colombianos.

En el informe del diario *La República* ya citado, se da cuenta de que según del número total de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias, el 84,5% devenga menos de dos salarios mínimos, el 9,7% percibe ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos y el 5,8% gana más de cuatro salarios mínimos.

7. *La República*, Jueves 11 de Noviembre de 2004.

Cuadro 6: Asalariados y no asalariados por tramos de salario mínimo (SM).
Total nacional (millones de personas)

	Trimestre III 1994				Trimestre III 2000				Trimestre III 2002			
	Asalariados		No asalariados		Asalariados		No asalariados		Asalariados		No asalariados	
Total	9,40	100%	4,70	100%	8,50	100%	7,10	100%	7,40	100%	8,00	100%
Menos de medio SM	0,86	9,13	1,30	27,20	1,00	12,00	3,10	44,20	2,00	27,40	5,00	62,90
De medio a menos 1	2,00	21,30	1,00	20,70	1,70	20,40	1,60	22,90	1,30	18,00	1,50	18,90
De 1 a 1,5	3,00	31,80	0,73	15,40	3,00	36,20	0,88	12,40	2,20	30,60	0,53	6,80
De 1,5 a menos de 2	1,20	13,20	0,41	8,60	0,93	11,10	0,47	6,60	0,55	7,50	0,33	4,20
Subtotal	7,13	75,50	3,41	72,07	6,76	79,70	6,15	86,10	6,19	83,50	7,44	92,80
De 2 a menos de 3	1,10	11,60	0,52	11,00	0,72	8,50	0,32	4,50	0,51	6,80	0,21	2,60
De 3 a menos de 5	0,75	8,00	0,40	8,40	0,60	7,00	0,34	4,90	0,43	5,90	2,00	2,40
De 5 a menos de 10	0,32	3,40	0,26	5,50	0,31	3,70	0,22	3,10	0,21	2,80	0,13	1,70
10 y más	0,13	1,30	0,13	2,90	0,10	1,20	0,10	1,40	0,07	1,00	0,04	0,50

Fuente: CID Universidad Nacional 2003.

Si se compara esta información con la que en el 2003 elaboró el CID de la universidad Nacional (véase cuadro 6), nos encontramos con un deterioro de los ingresos de los trabajadores asalariados. En efecto, en el tercer trimestre del 2002 el porcentaje de asalariados que estaban por debajo de dos salarios mínimos era del 83,5%, en tanto que al 30 de septiembre de 2004 era de 84,5%. Y la razón de este deterioro es evidente: la reforma laboral lo que hizo fue transferir recursos de los bolsillos de los asalariados a los de los empresarios.

El resultado no puede ser otro que agravar los problemas de distribución del ingreso, que colocan a nuestro país como uno de los que presenta las mayores desigualdades en el continente, como lo señala José Antonio Ocampo, secretario general adjunto de la ONU para asuntos sociales: “en América Latina el único

país que, mezclando indicadores, nos supera claramente es Brasil, que es una de las economías más desiguales del mundo, pero después de eso, estamos en el grupo de los países más desiguales del mundo. Países en los cuales la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre es 30 a 40 veces, cuando en un país industrializado esa relación es de 7 a 8 veces”.⁸

Pero además, afectar de manera negativa los ingresos de los trabajadores en la forma que lo hace la reforma laboral tiene un efecto negativo sobre el consumo de los hogares, haciendo más difícil la posibilidad de formación de un mercado interno dinámico que incida positivamente en el crecimiento económico a tasas que efectivamente permitan la creación de empleo.

8. José Antonio Ocampo Gaviria, “Desarrollo humano, un desafío para el milenio”. *Observar* N°. 13, diciembre de 2004.

Violations of the Human Rights of Colombian Unionists in 2004

An overview of the happenings during 2004

Contrary to the point of view of the national government, 2004 was a year in which the greatest number of violations of the rights of Colombian unionists occurred, in comparison with the last five years. The repetition and gravity of these events prove that the crisis of Colombian unionism does not correspond to the existence of diffuse and indiscriminate violence, as some attempt to show in order to obscure the real depth of the problem. To the contrary, this crisis is marked by systematic, permanent, and selective violations of the human rights of Colombian workers, in a general context of impunity, which reaffirms the fragility of our democracy and the distance which exists between the country of laws which guarantee the fundamental right to organize, and the real country in which the rights of unionists are constantly violated.

This statement can be supported by the records of violations, which went from 626 in 2003 to 688 in 2004, signifying a 9,9% increase in anti-union violence. In addition, if we compare the records from the last five years, from January 1, 2000 – December 31, 2004, it can be established that violations have increased by 21,6%. The information registered in the

Human Rights Database of the ENS shows that in Colombia, between January 1 and December 31, 2004, there were 688 cases of violations against the life, liberty, and personal integrity of the country's unionists. Of these violations, 445 correspond to death threats, 94 to homicides, 77 to arbitrary detentions, 17 to harassments, six to disappearances, five to kidnappings, 33 to forced displacements and three to illegal searches.

This worrying panorama of increased human rights violations reaffirms and highlights that the violence against unionists takes place in a context of systematic, selective, and extended violence, which continues to leave a long shadow of impunity, which tries to dissipate and hide itself with the passing of time and the succession of violations. This relegates the obligations of the State to situations whose density and multiplicity are converted into shields to diffuse the recent past, where history loses relevance and impunity gains ground.

2004 falls into the same logic we have seen in the last fifteen years, in which systematic violence primarily occurs in the context of labor conflicts: protests due to the lack of compliance with agreements or during collective bargaining negotiations.

Dynamic of the Violations

- 9,9% more total violations against unionists in the country with respect to 2003, going from 626 violations to 688 in 2004.
- An 3,29% increase in homicides against unionists with respect to 2003, which is equivalent to three additional cases registered in 2004.
- An 50,33% increase in threats against unionists, that is to say, 149 more cases registered than in 2003.
- An 16,6% increase in forced disappearances, which is equivalent to six more cases registered than in 2003.
- An 57,14% increase in arbitrary detentions, from 49 cases registered in 2003 to 77 in 2004.
- An increase of 21,42% in violations committed by State actors. 85 cases are signaled as work of State entities (Army, Police, and Administrative Department of Security-DAS). In the same period in 2003, 70 violations were registered with State entities as the presumed responsible actor.
- An increase of 20,6 % in violence against women unionists, from 194 registered violations 2003 to 234 in 2004.
- An increase of 15,6% in violence against unionized workers in the education sector, which qualifies the workers in this sector as the most affected by anti-union violence, with 61,1% of violations carried out against them.
- An increase in anti-union violence and human rights violations against unionized workers in Antioquia, from 57 violations in 2003 to 153 in 2004; Valle del Cauca, from 40 registered cases to 89; Atlántico moved from 17 violations to 78; Tolima, from 13 registered cases to 43; Bolívar, from 9 registered cases to 43; Sucre, from 9 to 78; and Norte de Santander, that went from 9 registered cases in 2003 to 12 in 2004.
- An increase of 155,5% in violations against union organizations affiliated to Fensuagro, passing from 18 registered cases of violations in 2003 to 46 violations registered in 2004.
- A 70% decrease in attacks against union workers, from 20 cases in 2003 to 6 in 2004.
- A 75% decrease in illegal searches, from 12 registered cases in 2003 to 3 registered cases during 2004.
- A 28,57% decrease in kidnappings in 2004, from 7 registered cases in 2003 to 5 in 2004.
- A 18,4 % decrease in violations against union leaders in the country.

Relevant Trends in 2004

In this context, it is important to emphasize certain aspects that marked the general panorama of violations in 2004, a year in which death threats, violations against teachers and farmworkers, violations against women unionists, and State responsibility for violations and the historical continuation of the judicial impunity delineate the violations against unionists in the country.

Threats Against Union Leaders

Death threats carried out against unionists in an individual and selective way constitute, without a doubt, the most critical situation in the panorama of violations to the life, liberty, and physical integrity of workers during 2004. The accelerated growth, from 296 cases registered during 2003 to 445 in 2004, which is equivalent to an increase of 50,8%, reflects the worsening of anti-worker violence in the country, and puts in relief the lack of guarantees for

union activity and the dominant anti-union culture that has been promoted with special emphasis during the Uribe administration, which has found the workers to be strong opponents of his democratic security policy. This general argument explains the greater number of death threats by paramilitary groups against high-ranking union leaders and activists.

Persecution Against Agricultural Workers Grows

The persecution against agricultural workers in the country is a historical tendency within the scheme of violations against the union movement. However, during this current administration, this violence has been systematically and repeatedly directed against workers affiliated to the National Unitary Agricultural Worker Union Federation, Fensuagro. According to the information in the Human Rights Database of the ENS, 47% of all arbitrary detentions were directed against agricultural sector workers. The agricultural sector unionists in the Sucre, Tolima, and Arauca provinces live in the gravest situation. They are victims on a daily basis of massive detentions, judicial frame-ups, and assassinations of their principal leaders. To this we can add the fact that today, the dramatic situation of the farmworkers is perhaps one of the most invisible in the general panorama of violations.

Violations Against the Education Sector

The situation of Colombian teachers is another important element in the violence against unionists in the country, as this sector of the union movement has been the most affected by violations to life, liberty, and physical in-

tegrity. During 2004, teachers and university workers have been victims of 61,1% of the total violations against unionists. In this context of violations, it is important to underline that 48 have been assassinated, representing 51% of the total homicides; 320 have received death threats; thirty have been forcibly displaced; fourteen have been victims of arbitrary detentions; and five have been disappeared. It is also important to add to this worrying scenario that of the 48 education sector workers assassinated in the country, 38 teachers were affiliated to the Colombian Federation of Educators, Fecode, ten of the victims were affiliated to the unions of university workers and professors, and thirteen were women unionists. In addition, according to the Human Rights Observatory¹ of the Vice-President's Office and the National Police, 63 educators (without categorizing for union affiliation) were assassinated in 2004, presenting an 54% increase with respect to 2003.

The Strategy of Terror Against Women Unionists Increases

The strategy of terror against women unionists in the country seems today as perhaps one of the most particular phenomena in the current panorama of human rights violations against unionists. In the 2003 report, we registered with concern an 600% increase in violations to life, physical integrity, and liberty with respect to 2002, this year, a 20,6% increase was registered, continuing its upward climb. The information registered in the Human Rights Database of the ENS shows us that during 2004, women were victims of 16 homicides, 187 death threats, eight arbitrary detentions, two

1. Executive Summary of the Annual Human Rights Report prepared by the Vice-President's Office, published at www.presidencia.gov.co.

illegal searches, and two cases of harassment. It is worth mentioning that anti-union violence against women has been traditionally interpreted as a collateral effect of the war, except for actions taken against high-ranking women union leaders. The victims of this violence have been seen as victims of an indiscriminate armed conflict or as accidental victims of the violence taken and directed against the union movement. In this sense, the statistics of violence against women have in many cases been underestimated and seen as unimportant as compared to the total number of violations against male union leaders. However, looking beyond the recorded statistics, it is necessary to look at the violations against women in the context of the symbolism and phenomenology of the crimes and of the intentions and languages of their perpetrators.

What we see, in the end, in the increase in violence against women, is the displacement of violations towards the entire family unit of the unionist, something that also puts at risk the physical integrity of people who do not participate in the union movement. With the substantial increase in violations directed against women unionists, we can eliminate the theory of collateral victims, as these cases show a logic of discriminate violence whose objectives go beyond the mere intention of silencing the victim. They reflect a symbolic and strategic end of immobility and terror.

State Responsibility for Violations

With respect to state responsibility for human rights violations against unionists, in addition to the prolonged, historical trend of impu-

nity that has accompanied the violations against unionized workers, it is relevant to state that in 2004, the historic tendency to not be able to identify the authors of these violent acts has continued. Precisely, in agreement with this historical trend, in 69,4%, or 475 of the registered cases, both the material and intellectual authors of the crimes are unidentified. In the remaining 30,6% (213 cases), for which information does exist about the possible authors, the information supplied shows that 105 cases are attributed to the self-defense forces and/or the paramilitaries, 85 to the forces of the State, 13 to social violence and common crime, and six to the guerrilla groups. We should state that State responsibility is concentrated in arbitrary detentions, searches, and extrajudicial executions committed against union leaders in the province of Arauca.

The Statistical “Paradoxes”

The paradox of the statistical data or the technical strategies to try and present improvements in the human rights situation, given the supposed decrease in violations against unionized workers, is another important aspect in the current panorama of violations. In the executive summary of the Annual Human Rights Report, prepared by the Vice-President’s Office for the visit of the group of government representatives from foreign countries that donate foreign aid to Colombia, it is stated repeatedly that, thanks to the implementation of the democratic security policy and to its positive results, violence against unionists has decreased by 27%.² The report also states that in their comparative tables for 2003 and 2004,

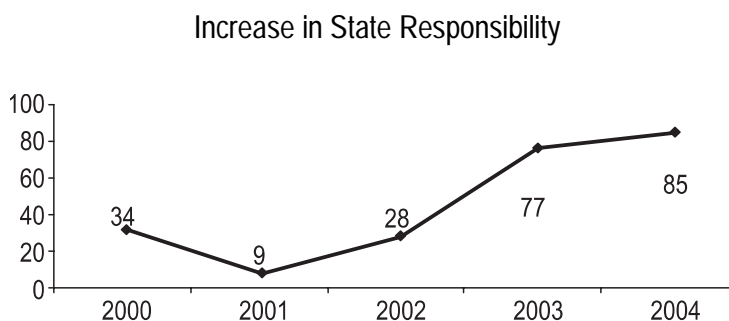
2. “In the framework of the implementation of the democratic security policy, there have been other important successes in 2004. Thanks to the protection programs organized by the government, during this year the number of homicides of unionists registered a 27% decrease...” In continuation: “The government is especially concerned by

on human rights statistics and the results of the operations of government forces, in 2003 there were 55 homicides against unionists and 40 in 2004, showing a 27% decrease, and that in this same period, 41 homicides against teachers in 2003 rose to 63 in 2004, showing an increase of 54%.

To the ENS, this report is reason for concern, as the national government has spread the word with enthusiasm about the decrease in homicides against unionized workers as a consequence of the implementation of its democratic security policy, without recognizing the grouping of unionized workers who are teachers, of whom they state have been victims of a 54% increase in homicides in 2004. As we mentioned earlier, 38 of the assassinated

educational sector workers were members of Fecode. So if we add the 38 assassinated unionized teachers a registered by Fecode to the 55 unionists assassinated as stated by the government, we can state that no such decrease exists, and contrary to the triumphant statistics, the situation of Colombian unionists is going through a graver crisis than that which we saw during the year to which we are comparing. In addition, it leaves much to be desired that unionists and teachers are put into separate categories, as if these categories are exclusive, in an attempt to present an advance in the human rights situation, which is impossible to sustain with statistical arguments, even when they have been carefully manipulated.

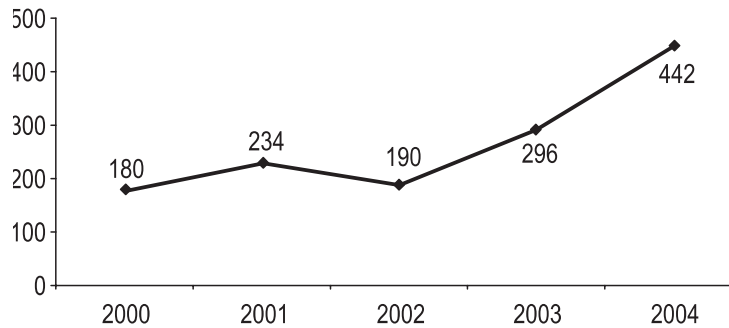
Graphics and Tables



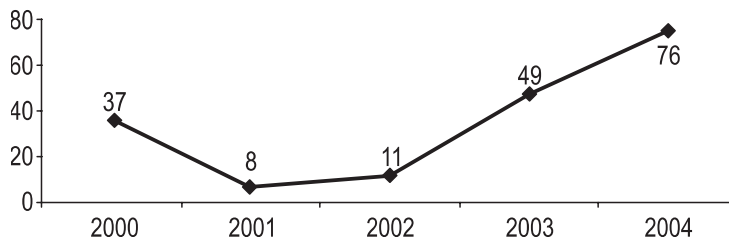
Source: Human Rights Database of the ENS

the increase in homicides of teachers in 2004, a 54% increase compared with 2003, although it should be mentioned that kidnappings against this population decreased by 37%, as well as the fact that 84% were freed and 6% rescued by government actors. In this topic related to the kidnapping of teachers, 55% of the kidnappings were carried out by the FARC, 26% by the ELN, and 7.5% by self-defense forces or unidentified groups.”

Threats Against Unions and Union Leaders



Source: Human Rights Database of the ENS

Arbitrary Detentions Against Agrarian Sector Unionists
2000-2004

Source: Human Rights Database of the ENS

Total Violations Against the Educational Sector
January 1 – December 31, 2004

Type of Violation	Number of Cases	Percentages
Threats	320	76,01
Assassination Attempts, with or without injuries	1	0,24
Dissappearances	5	1,19
Displacements	30	7,13
Arbitrary Detentions	14	3,33
Homicides	48	11,40
Harassments	2	0,48
Kidnappings	1	0,24
Total	421	100,00

Source: Human Rights Database of the ENS

Presumed Responsible
Total Violations Against Colombian Unionists
January 1-December 31, 2004

Presumed Responsible	Number of Cases	Percentage
Self-Defense Forces and/or Paramilitaries	105	15,26
State Entities	85	12,35
Employers	4	0,58
Guerrillas	6	0,87
Common Criminals	13	1,89
Not Identified	337	48,98
Without Information	138	20,5
Total	688	100,00

Source: Human Rights Database of the ENS

Total Violations of the Life, Liberty, and Physical Integrity of
Colombian Unionists
January 1-December 31, 2004

Violations	Number of Cases	Percentage
Illegal Searches	3	0,4
Threats	445	64,68
Assassination Attempts with or without injuries	6	0,87
Dissapparances	7	1,02
Forced Displacements	33	4,80
Arbitrary Detentions	77	11,19
Homicides	94	13,66
Harasments	17	2,47
Kidnappings	5	0,73
Torture	1	0,15
Total	688	100,00

Source: Human Rights Database of the ENS

The Labor Situation in 2004

1. The Dynamic of the Union Movement in 2004

The Union Movement Mobilizes Against the Social and Economic Policies of the Government

Among the sectors that mobilized most in Colombia in 2004, the union movement takes first place. Other sectors that also carried out a certain number of important mobilizations were, in order of ranking, the cargo transport workers, who for almost a month paralyzed their vehicles to negotiate more favorable fleet conditions; the indigenous communities, particularly those in the south of the country, who mobilized against the violence that they suffer at the hands of diverse armed actors and against the Andean Free Trade Agreement (AFTA) for the possible threat it causes to their culture and to their ancestral wisdoms; the women's organizations, who mobilized on March 8 in the principal cities of the country to demand their specific rights and to denounce the discrimination, inequality, and violence that they are still subjected to; the organizations of family members of kidnap victims and disappeared persons; some farmers organizations that were affected by the importing of food products and by the negotiation of the AFTA, such as the rice farmers; and some community and neighborhood organizations, that confronted cuts to essential public services, restructuring of pub-

lic transportation systems, increases in public utility rates, or the imposition of tolls that increased transportation costs.

In total, during 2004, there were 91 union mobilizations and protests,¹ a 9,63% increase as compared to 2003, which is an indicator of what is currently happening to the labor and social rights of Colombian workers. This statistic does not include the mobilizations and protests motivated by collective bargaining negotiations, with the exception of the collective conflicts in Ecopetrol and in the banana production zone of Urabá, due to the magnitude and impact that they had. The collective bargaining dynamic will be analyzed in a different part of this report.

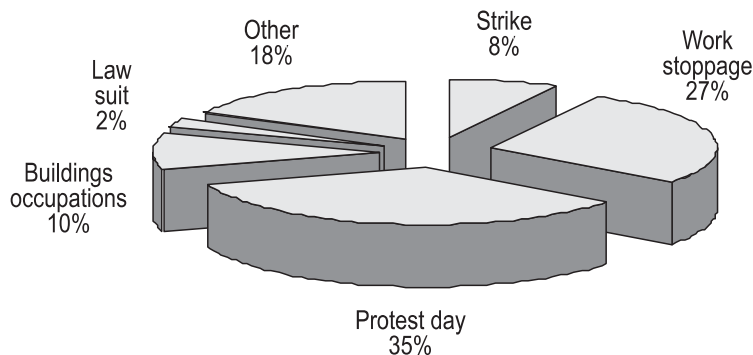
The principal forms of union mobilizations were the protest (35%) and the work stoppage (27%), which indicates an absence of proven and legitimate mechanisms of social dialog that would allow an adequate treatment of the problems that are the cause of the protest actions by the unions.

Within the forms of union mobilization, we can also count the occupation of buildings (9,9%); the strike (7,7%); and "others" (19,8%); among which figure actions taken during collective bargaining negotiations, abnormal working hours, work-to-rule actions, pickets, marches, solidarity actions, and local and regional campaigns.

1. Data calculated by the ENS from union activity recorded by the national media.

Graph 1

Executed action



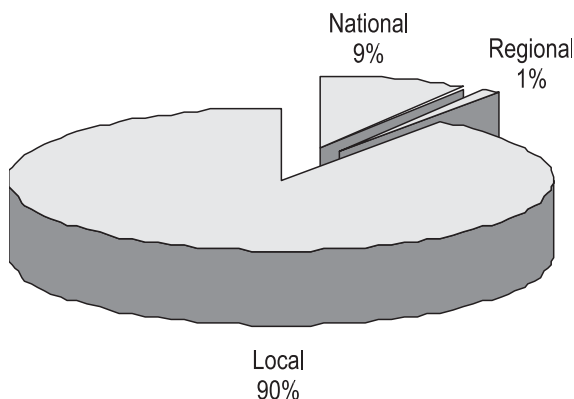
In regards to the protests, they were able to join together other social sectors such as students, retirees, community mothers, and neighborhood and poor people’s organizations; which reveals, first of all, the kinds of problems that the unions were protesting: the AFTA, the defense of the rule of law, the tax, pension, legal, and labor reforms, the possibility of reelection of the President, and privatizations. Second, this reveals the ever-stronger concern of the unions to establish a clear policy of building alliances with other social movements in

order to have a greater impact in public policy. This second factor is clearly reflected in the place that the union movement occupies in the Great Democratic Coalition, which unites different social and political movements, and which is coordinated by the CUT through its President, Carlos Rodríguez.

In regards to the coverage, although 90% of union actions had a local character, the remainder were held all over the country, showing the advances in the processes of coordination among the unions on a local, regional, and

Graph 2

Action Coverage



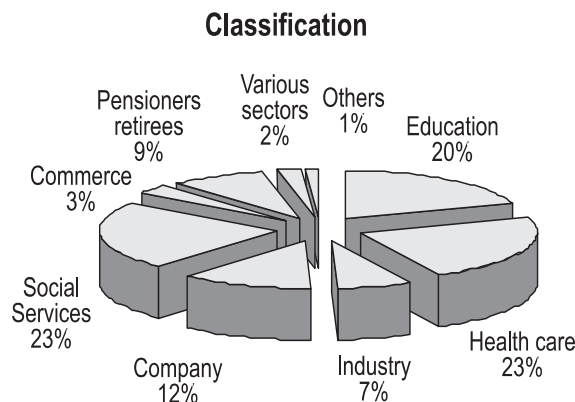
national level, and on one occasion, on an international level, due to the protest against the AFTA coordinated among all the Andean countries by the union organizations of those countries.

Among the national protests, we should highlight that of October 12, whose fundamental demands were against the reelection of the President and against the AFTA, for a negotiated solution to the armed conflict, the legislative agenda, and respect for the rule of law.

The predominance of local mobilizations does not signify, in any way, the fragmentation of union mobilizations or the atomization of its demands. This reflects the importance of local and regional problems and their impacts on the rights of these communities, and in particular, workers rights. Here we can see grave problems related to the right to health in regions such as Santander and Caldas, and the impact that the struggles of USO/Ecopetrol and Sintraemcali and the Municipal Public Utilities Company of Cali, Emcali, had.

The Most-Affected Sectors and the Reasons for their Protests

Graph 3



Although each sector experienced a different specific situation, the majority of the labor conflicts that occurred in 2004 can be explained by the policies of the government aimed at re-structuring the State, which weaken its social function. These policies prioritize the investment of the national budget in the payment of the public debt and in the financing of the war; transfer the management of public

services linked to the fulfillment of social, economic, and cultural rights to the market and to private actors; utilize the closing or fusion of public entities to save money; fall back upon the privatization of state companies to finance the budget deficit and to favor private capital; and affect the budget of the public entities which provide essential services for the population, affecting the labor and social rights of

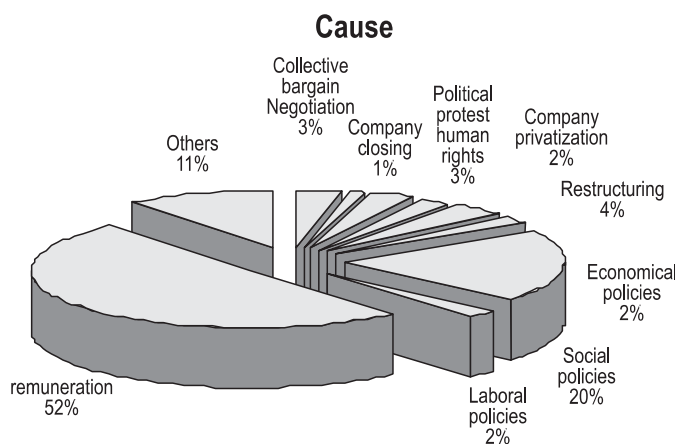
the workers of these entities.

Finally, a large part of the legislative agenda promoted by the government brings as a consequence negative affects to the essential rights of the population, such as the pension reform, or the reform to the judicial system, which restricts the use of the special petition to demand rights guaranteed by the Constitution (*tutela*), limits the functions of the Constitutional Court, and restricts a large part of the social and demo-

cratic rights designed and incorporated into the 1991 Political Constitution.

And in the private sector, the implementation of company restructuring plans which aim to gain competitiveness through lowering labor costs and worsening labor conditions, are driving towards an accelerated decline in the earnings of workers which increases the inequality in the distribution of earnings, and has made it more difficult to exercise union rights.

Graph 4



Within this context, the union sectors most active in 2004 were those of the health care sector (23% of total mobilizations), social services (23%), education (20%), industry (7%), others (12%) and commerce (3%). Due to their demands, many of these mobilizations had the strong support of the citizenry and of other social sectors (union confederations, students, community mothers, heads of household). These mobilizations reflected issues which transcended the traditional demands of the unions, such as the conservation of the public patri-

mony, the elimination of the democratic security project, and the defense of the rule of law.

Here we see the origins of conflicts such as those in the health care sector (provincial public hospitals, Social Security Institute), education (SENA, Fecode), domestic public utilities (Sintraemcali), the energy sector (Ecopetrol, electric plants), the banking sector (Bancafé), and the communication sector (Adpostal, Inravisión), among others.

In particular, in the health care sector, the crisis of the local and provincial hospital network worsened as a consequence of the failure of Law 100 of 1993, which privatized health care, occupational safety insurance, and pensions, and strengthened the private interests that now control the EPS (managed care providers). The disintegration of the Social Security Institute, the conversion of all the workers of this entity into public employees, restricting union freedoms; the closing and administrative restructuring of public hospitals; the delays in payment of salaries and benefits; the increase in co-payments; the lack of supplies for hospitals.... caused important union mobilizations by health care workers, especially those of unions such as Anthoc and Sintraseguridad Social.

In this sector, the mobilizations organized by the workers of the Ramón González Valencia University Hospital of Santander should be especially acknowledged, as they had the backing of the student organizations of Santander, the CUT, and other unions from this region. These mobilizations culminated in the massive march that was held from Bucaramanga to Bogotá to demand a solution which would permit the defense of the rights to health and to work and would avoid the closure of the hospital.

In the education sector, there were two primary causes for the protests led by the union affiliates of Fecode. One case was the grave problem of diversion of resources, inefficiencies in their application, and corruption in their management by local and regional governments, affecting the quality and coverage of the public education system and the remuneration of teachers of all levels but specifically primary

school teachers. These resources were also affected by the government policies that prioritize the payment of the public debt to private entities over the payment of the social debt. A second cause was the imposition of merit-based testing that determined the future of the teachers' jobs, cuts their salaries, makes their working conditions more unstable, and transfers to provisional positions managed by the clientelistic machinery of Uribe the teachers who had not participated in the testing or had not achieved the minimum scores on the tests.

The mobilizations of the pensioners and retirees were significant in 2004, motivated by the attempts of the government to modify the current pension scheme, with the fundamental intention of alleviating the budget deficit through cutting the incomes of this population, through affecting the benefits acquired by those currently in the transition regime as established by Law 100 of 1993, and through making it more difficult for current and future workers to access this benefit by increasing the age and the number of weeks of contributions.

The demand for payment of salaries and benefits, both those mandated by law and those contained in collective bargaining agreements, occupied an important place within the motives for union mobilizations and protests (52%). This situation occurred primarily in the public sector (teachers, health care workers, public sector workers of municipal and provincial governments), which was affected by the cuts to the transfers that the national government must send to the municipalities for education and health care, by the crisis of the Colombian hospital sector, and by the problems of financing, corruption, and inefficiency that is found in many regions of the country.

Finally, in the private sector, there were three collective conflicts which transcended their respective sectors. One was the conflict in the region of Urabá, where Sintrainagro, the union that represents 98% of the banana workers of this region was obligated to carry out a twenty day strike to defend their collective bargaining contract. This strike succeeded in not only defending the contract, but also in obtaining the commitment of the government and of the employers of the sector to finance a study which would permit the establishment of a system of price measurement, which the government entity in charge of economic statistics, the DANE, would monitor.

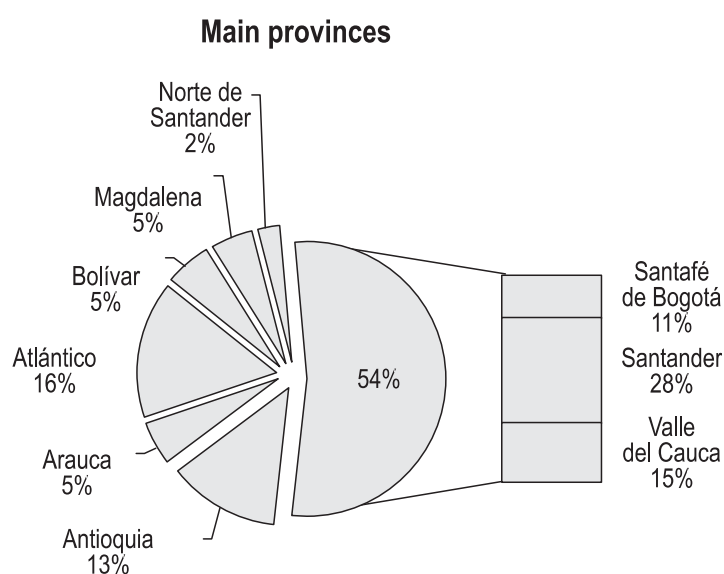
The second action was carried out by the workers of the multinational corporation Coca-cola who are members of the union Sinaltrainal. This union has been leading an international

campaign against the company, which has joined with some of the management of its subsidiaries in the implementation of anti-union policies, which in some cases have resulted in the assassination of leaders and affiliates of the union, the closing of bottling plants, the firing of workers, and the refusal to negotiate collective bargaining contract demands presented by the union. These occurrences forced the union to carry out a hunger strike for over two weeks in March 2004.

Finally, the “work to rule” actions carried out by the Colombian Association of Civil Aviators, ACDAC, against the airline Avianca, which systematically refused to apply the collective bargaining contract in relation to salary increases, were notable for the impact they caused on air travel.

Union Conflicts by Regions

Graph 5



In 2004, the province of Santander is the region where more union protests and mobilizations occurred than any other (28%). Particularly, the struggles of the USO for the defense of Ecopetrol as a public patrimony and for the defense of their collective bargaining contract achieved the mobilization of union and popular sectors all over the country, and in Bucaramanga there was the conflict mentioned earlier against the closure of the Ramón González Valencia University Hospital. These conflicts occupied a central space in both pub-

lic opinion and in the mass media for several months.

Next is Atlántico (with 16%) with different education sector conflicts (University of Atlántico, public high schools) and health care sector conflicts (HUB, Hospital Pediátrico and Hospital San Francisco). Next was Valle del Cauca (15%), where Sintraemcali carried out its protests against the privatization of the public utilities company in Cali. Following this was Antioquia (13%) and Bogotá (11%).

2. Summary of Collective Bargaining in 2004

The Collective Bargaining Contract Wilts

Table 1: Collective bargaining contracts, collective pacts, and coverage of collective bargaining

	2000	2001	2002	2003	2004
Collective bargaining contract	491	328	492	173	434
Collective pact	153	149	204	110	192
Union contract	4	6	4	1	2
Total	648	483	700	284	628

Source: Social Protection Ministry and statistics of the ENS.

Compared to 2002, 72 fewer collective agreements were signed, however in 2002, 35 collective bargaining contracts were signed that expire in 2005 and 2006, which explains the -5,56% decrease in collective agreements between 2002 and 2004. In any case, this slight decrease moves in the direction of the pronounced trend towards the weakening of collective bargaining which began in the beginning of the 90s due to the economic reforms of that decade and due to the imposition of the labor reform or Law 50 of 1990.

The highest number of collective agreements signed were collective bargaining contracts - 434, or 69,1% – which are agreements negotiated between unions and companies. This is followed by collective pacts, a type of collective agreement in which the unions do not participate, with 192 (30,57%), and throughout the entire year only two union contracts were signed (0,31%).

The sectors with the highest number of collective pacts was the manufacturing industry, with 98 cases (51,85% of all negotiations in this

sector); followed by the commerce and tourism sector with 18 (37,5%); community and social services, with the same number of cases (21,68%), and the agriculture, hunting, and fishing sector, with 40 cases (16,87%).

The category of “collective pact” has been established in our legislation as a supposed alternative method of “negotiation” for non-unionized workers. However, in the majority of cases, there was no real negotiation, just impositions from above, which many companies use as an anti-union strategy. The Committee on Union Freedoms of the ILO has already made a pronouncement on this aspect of the collective pact, when it stated that “the direct negotiation between companies and their workers without the participation of representative organizations, when they exist, can in certain cases go against the reason why collective bargaining between employers and workers organizations should be encouraged and fortified”.²

Collective Bargaining by Economic Activity and Workers that Benefited from Collective Bargaining

The highest number of collective bargaining contracts were found in the agriculture, hunting, and fishing sector, with 37,73% of the total. The significant participation by this sector in the total number of collective bargaining contracts is due to the negotiation that took place in the banana growing region of Urabá between Sintrainagro and the association of banana growers.

There were 189 negotiations in the manufacturing sector, which represented 30,09% of the total; this is followed by the sector of community, social, and personal services, with 83

cases, or 13,21%; the collective bargaining of city and state governments, of public utilities companies, of universities, and of the health cares sector is grouped into this sector. In the commerce and tourism sector there were 48 cases (7,6%), due to the activity of Sintrahocar, which in 2004 negotiated 18 collective bargaining contracts.

There were 19 cases in the transportation and communications sector (3,02%), of which seven are collective pacts; followed by the financial sector with 15 cases (2,38%) and finally, by the mining and quarrying sector (1,43%).

Collective bargaining continues to be marginal in our country. In 2004 only 134.244 workers benefited from some form of collective agreement. 87.290 benefited from collective bargaining contracts, 46.842 from collective pacts and 110 from union contracts. If we add to this figure the number of workers covered by collective agreements in 1003, and compare it with the economically active population, 17.578.000 people in 2004, we see that collective agreements only benefited 1,17% of this population.

The sectors with greatest coverage are the financial sector with 11,57%, electricity, natural gas and water with 8,95%, mines and quarries with 4,44%, and the manufacturing industry with 2,67%.

This low level of coverage is due to various factors:

- The low unionization rate (5,11%).
- The culture and legal practice to only negotiate at the company level, excluding the possibility of agreements at a sectorial level.
- The anti-union policies implemented by the State and by businesses.

2. Compilation of the statements and decisions of the Committee on Union Freedoms. Paragraph 786. 1996.

Table 2: Collective agreements by economic sector and coverage compared to the economically active population (17.578.000)

Sector	2002	Coverage 2003	2004	Coverage 2004	Economically active population (thousands)	Coverage 2003-2004 %
1. Agriculture, hunting, and fishing	33	3.732	237	29.649	3.683	0,9
2. Mines and quarries	10	7.200	9	1.645	199	4,44
3. Manufacturing	115	26.793	189	37.543	2.408	2,67
4. Electricity, natural gas, and water	9	2.410	20	4.220	74	8,95
5. Construction	5	392	8	1.302	785	0,21
6. Commerce, restaurants, and hotels	38	3.817	48	10.633	4.400	0,32
7. Transportation and communications	10	2.264	19	13.519	1.205	1,31
8. Financial services	7	11.163	15	14.415	221	11,57
9. Community, social, and personal services	57	14.493	83	21.323	3.834	0,94
Total	284	72.264	628	134.244		1,17

Source: Social Protection Ministry. Statistics processed by the Escuela Nacional Sindical.

- The violence against unionists.³
- The existence of labor law which restricts union rights.
- The flexibilization in contracting practices to reduce labor costs, through the implementation of temporary contracts, subcontracting, the use of associated workers cooperatives, and civil contracts to avoid the obligations that are associated with a labor contract.

Collective Bargaining and Arbitration Tribunals

Table 3: Evolution of Arbitration Tribunals 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Cases	99	65	72	97	64

Source: Social Protection Ministry

3. In 2004, there were 688 cases of violations to the life, liberty, and physical integrity of Colombian unionists, of this total, 13,66%, or 94 cases, are homicides. See "Report on Human Rights Violations Against Colombian Unionists in 2004", Human Rights Report N° 15, Escuela Nacional Sindical, 2005.

Another reason behind the decrease in collective bargaining is a result of arbitration tribunals. 97 were invoked in 2003, with the majority (74) in the public sector, many corresponding to minority unions with no other way to end the collective conflict brought about by the presentation of collective bargaining demands. Of the 97 tribunals invoked in that year, only 18 cases ended in an agreement, or 18,55%. In 2004, 64 tribunals were invoked in which agreements were reached in only ten cases, or 15,62%.

These tribunals have become another obstruction to collective bargaining. Some unions, especially those in the public sector, refrain from beginning the collective bargaining pro-

cess in fear of the ability that the Supreme Court of Justice has given to the arbitration tribunals to completely change collective bargaining contracts. With this tactic, the demands of the company to weaken or eliminate benefits won by the workers are favored.

In addition, the fact that less than 20% are resolved in a timely manner indicates that in many cases, the invocation of an arbitration tribunal is a stalling mechanism used by the companies to pressure workers to resign from the union or to accept alternatives such as the collective pact, which also implies an abandonment of the union and the disappearance of real collective bargaining processes.

Collective Bargaining in the Public and Private Sectors

Table 4: Collective bargaining in the public and private sectors

Sector	Collective agreements
National	7
Province level	11
City level	29
Total Public sector	47
Total Private sector	581
Grand Total	628

Although the greatest number of unionized workers are found today in the public sector, a greater number of negotiations take place in the private sector, 581, or 92,51% of the total, as compared to 47 which took place in the public sector, or 7,48%.

The workers who negotiate in the public sector are the official workers of city govern-

ment, provincial governments, and state owned companies. Colombian law differentiates between the functions and rights that workers organizations of the public sector can have in relation to collective bargaining, through classifying them into "official workers" and "public employees."

Article 416 of the Labor Code establishes that unions of public employees cannot present collective bargaining demands or sign collective bargaining contracts. This goes against ILO Convention 151 of 1976, ratified by the Co-

lombian Congress through the signing of Law 411 of 1997, which gave the right to collectively bargain to public employees as well, yet the Colombian government continues to systematically refuse to apply this convention.

Collective Bargaining by Provinces

Table 5. Collective bargaining by provinces 2002-2003-2004

Province	2002	2003	2004	%
Antioquia	252	82	246	39,23
Cundinamarca	219	88	244	38,91
Valle	65	17	39	6,22
Santander	25	17	14	2,23
Bolívar	17	4	7	1,11
Boyacá	15	2	9	1,43
Magdalena	13	8	9	1,43
Atlántico	10	21	9	1,43
Quindío	11	3	1	-
Caldas	8	-	6	0,95
Tolima	8	9	6	0,95
Meta	8	2	6	0,95
Arauca	5	-	3	-
Risaralda	5	2	4	-
Huila	5	1	7	1,11
Cordoba	3	2	2	-
Casanare	3	2	1	-
Caquetá	3	-	1	-
Amazonas	2	1	4	-
N. Santander	2	1	4	-
Cauca	1	-	-	-
Nariño			1	
Chocó	1	2	-	-
Mocoa	1	-	-	-
Vaupés	-	-	1	-
Florencia	-	-	1	-
San Andrés	-	-	1	-
Sucre	-	-	1	-
Total	700	284	627	

Source: Social Protection Ministry

Close to 80% of collective agreements were signed in Antioquia and Cundinamarca, representing 39,23% and 38,91% respectively, followed by Valle del Cauca with 6,22%, Santander, Boyacá, Magdalena, Atlántico and Bolívar.

Collective Bargaining by Type of Union

Collective bargaining is most common in industry-wide unions, with 53,75% of cases, followed by company-level unions with 14,21% and finally, profession-wide unions with 0,49%.

Table 6: Collective bargaining by type of union

	2001	2002	2003	2004	%
Company-level union	131	140	55	87	14,21
Industry-wide union	176	336	114	329	53,75
Profession-wide union	20	16	5	3	0,49

Source: Social Protection Ministry

This situation differs from the union structure that prevails in Colombia, where 52,11% of the unions are profession-wide unions, whose principal function is not collective bargaining, 38,37% are company-level unions, while industry-wide unions make up 8,92% of the total.

Regarding the dynamic that industry-wide unions have in relation to collective bargaining, this does not signify that collective bargaining on an industry or sector-wide level exists. Rather, the majority of cases of collective bargaining take place on the company level. This contrasts with the situation in other countries where union freedoms are protected and en-

couraged by the State, and collective bargaining negotiations take place simultaneously both on a company level as well as on an industry or sector-wide level, and also on a national level through inter-confederational agreements⁴ between union organizations and employers, which serve as a base for the development of negotiations on other levels.

In Colombia, the legislation does not explicitly include the possibility of negotiation on levels higher than that of the company level, in fact it forces the industry-wide unions to act in practice as company-level unions, repressing sector-wide negotiations and union freedoms.

4. We found the following reference to the inter-confederational agreement on the web page of the UGT of Spain (www.ugt.es): "The representatives of the employers organizations (CEOE and CEPYME) and of the unions (UGT and Comisiones) have finalized today the Inter-Confederational Collective Bargaining Agreement for 2005 (ANC 2005), which will be officially ratified next Friday by the leaders of each organization".

Collective Bargaining by Union Confederation

Table 7: Collective bargaining by union confederation or central

Confederation	2002		2003		2004	
	Frequency	%	Frequency	%	Frequency	%
CUT	266	38,00	70	24,65	282	44,90
CGTD	60	8,57	42	14,79	53	8,43
CTC	22	3,14	5	1,76	14	2,22
Independent or lacking Information	144	20,57	-	-	86	13,69
Total	700		284		628	

Source: Calculations of the Social Protection Ministry, using information provided by the Inspection, Monitoring, and Control Area. Elaborated by Alfonso Riaño Barón.

In agreement with the union structure of the country, where the greatest number of unions are affiliated to the CUT, the largest number of collective bargaining contracts were signed by unions affiliated to the CUT, followed by the CGT and CTC. The large number of negotiations that were carried out by independent, non-

confederated unions should be noted.

Salary Increases

As it is observed in Table 8, the majority of collective agreements signed included salary increases higher than the level of inflation during the previous year.

Table 8: Salary increases in collective agreements

2003 (6,49% national level of inflation)			2004, (5,5% national level of inflation)		
Increases	Frequency	%	Increases	Frequency	%
Between 1% and 5%	11	3,9	Less than level of inflation (5,5%)	21	3,34
Between 5,01% and 7%	107	37,7	Equal to level of inflation	9	1,43
Between 7,01% and 8%	118	41,5	Between 6% and less than 7%	142	22,61
Between 8,01% and 10%	41	14,4	Between 7% and less than 8%	180	28,66
			Between 8% and less than 9%	242	38,53
			Between 9 and 10%	23	3,66
			More than 10%	11	1,75
			Total	628	100,00
Between 10,01% and 12%	6	2,1			
More than 12%	1	0,4			

Source: Calculations by the ENS from information provided by the Social Protection Ministry (Inspection, Monitoring, and Control Area).

Traditionally, only the level of inflation is used as a reference for negotiating salaries. In the collective bargaining culture, other references are still not included, such as productivity increases, which would force the unions to be more technically and professionally adept, to be able to access greater information about the financial, economic, and labor situation of the company, so that the union can understand its cost structure and the way in which salaries and labor costs impact upon this structure.

Collective Bargaining by Length of Time in Force

Traditionally, collective agreements were signed for a period of two years. However, in recent years, we have seen a tendency to sign

agreements spanning longer periods, of three, four, or even more years. This is due in part to uncertainty by the unions generated by processes of industrial change and restructuring of the workforce and of the companies, as well as the changes that the government has been implementing in labor policy, which drives the workers to seek greater stability in relation to fighting for more benefits. This can also be explained by business' desire to assure a better working environment.

In 2004, the statistics of the Social Protection Ministry show 68 collective agreements signed for lengths of time of more than two years (10,82%); 46 agreements were signed for more than three years; 22 for four years and in two cases, for five years.

3. Labor Reforms and Employment

When the labor reform was presented in Congress, the government stated that the most important aspect of the reform would be the creation of a social protection system, "defined as the combined set of public policies designed to lessen the vulnerability and improve the quality of life, which would allow the realization at a minimum of the rights to health, pensions, and jobs".⁵

Faced with the drama of 2.767.000 unemployed workers and in a context in which thousands and thousands of workers are excluded

from the social protection system, because they are informal sector workers who do not earn enough to pay in to the social security system or because they are formal sector workers whose employers evade their obligations – only 24 of every 100 people are affiliated to a pension regime and in regards to health care, of every 100 workers, 40 have no coverage – faced with this drama, it is absolutely necessary that the country moves forward towards an effective social protection system. However, this was not actually the real reason behind the

5. Joint statement for Bill 057/ 02 (Senate) and Bill 056/02 (House of Representatives).

reform, as the union movement and other democratic sectors in the country anticipated, and as it can now be shown after two years of its application.

The Content of the Labor Reform and Its Impact

The reform contains four basic sections. The first established a subsidy for the affiliates of compensation institutes (*cajas de compensación*) that lose their jobs which is equal to 50% of the minimum wage, paid in coupons which would give them access to certain services of the institutes. The second included the creation of stimuli to generate employment in microenterprises and small and medium size businesses, which consist of employment subsidies, access to credit, and the extension of benefits to companies which employ vulnerable people. The third got rid of the central role that the SENA (national technical school) had in regards to employment training, changed the apprenticeship contracts, and established obligatory posts for apprentices in every business. Finally, in the fourth section, the normal workday was extended to 10 PM, the extra pay for holidays and Sundays was decreased, and the amount of severance pay for firings without just cause was reduced by half.

Table 1, created by the Labor Market and Social Security Observatory of the Universidad Externado de Colombia (2005), allows us to visualize if the government has complied with its intentions and lets us see the true impact of the reform after two years of its application.

Regarding the first part of the reform, the Superintendent of Family Subsidies has stated that in the past two years, 65.462 subsidies have been given out, a tiny number that represents very few workers (2,3%) in relation to the total number of unemployed people, 2.767.000 in all parts of the country.

Regarding the second part, which included stimuli for the generation of employment, the analyses carried out coincide in that the results for this part of the reform have been precarious at best. In relation to the total number of small businesses (43.242), medium sized businesses (8.041) and microenterprises (967.315), although the employment assistance programs only aimed to benefit 3.996 (!) companies, a mere 637 credits were delivered, and the program of subsidies to companies that generate employment has never been started.

Regarding the transformation that the reform introduced in the apprenticeship contract, the results are also very precarious, especially in the second year where its true impact can be clearly seen: in 2003, 59.615 additional apprentices were taken on, but already in 2004 the increase was a mere 2.187.

In regards to the utilization of the apprenticeship contract, the union movement claims that many businesses are using it to replace workers with a direct work contract which represent higher labor costs. This can be seen for example in the health care sector, where professional nurses and nurses aides have been replaced by personnel hired using the apprenticeship contract established by the labor reform.

Table 1. Estimations and achievements of Law 789: 2003 y 2004
Goals corrected for appropriations of resources⁶

	Execution 2003 (1)	Estimated impact through 2004 (2)	Comments	Execution 2004
1. Increased in day time workday		35.997 news jobs	No information exists to verify the estimated impact	
2. Reduction in overtime pay for holidays and Sundays				
2 Reduction of severance pay for firings without just cause.		54.997 news jobs	The reduction of severance pay has not significantly lowered labor costs	
3. Specials contributory re- gimes	0,3%	34.375 news jobs	24 businesses and 146 workers in 12-04	0,40%
4. Apprentices	89,0%	59.615 additional ap- prentices hired	2.187 additional apprentices hired	3,70%
5. Entreprenurial fund	0,0%	5.929 news jobs	24 businesses y 146 workers in 12-04	0,40%
6. Microcredit for small busi- nesses	2,0%	3.996 businesses	637 credits given out	15,90%
7. Temporary subsidy to employment	0,0%	5.929 jobs	Begun on May 8, 2004 and was re- viewed in January 2005	0,00%
8. Unemployment subsidy managed by compensa- tion institutes	43,0%	66.444 people	124.914 people applied and 65.462 subsidies were granted	98,50%
9 unemployment subsidy managed by the stated	0,0%		No information is available on this program	0,00%
10. Training for placement in the labor market	78,0% (16,0%)		40.508 workers benefited from free training by the compensation institutes	81,60% (64,25%)

(1) Source: Labor Market and Social Security Observatory (2004); (2) Source: "Bases for the national development plan 2002-2006", Superintendence, Social Protection Ministry (2004). (a) First indicator Shows the number of beneficiaries, the second indicates the resource execution.

The Impact on Employment

Regarding the impact that the reform had on the creation of new jobs, the statistics of the DANE are not very favorable. In effect, although there was a rebound in regards to employment

in 2003 as compared to the previous year, it should not be forgotten that we had just experienced a serious economic recession, with a drop of the GDP in 1999 of -4%, with the recovery beginning in 2000.

6. "Myths and realities of the Colombian labor reform. Law 789 two years later". Reports on Work N° 6, Labor Market and Social Security Observatory, Universidad Externado de Colombia, 2005.

Table 2: Labor market behavior in 2002-2003-2004 – annual average (in thousands)

	2002	2003	Var. %	2004	Var.%
GDP growth	1,93%	4,02%		3,96%	
Total population		43.134		43.860	1,68
Working age population	32.146	32.755	1,89	33.462	2,15
Economically active population	19.656	20.345	3,50	20.325	-
Employed	16.711	17.467	4,52	17.578	0,63
Unemployed	2.860	2.878	0,62	2.767	-3,85
Underemployed	6.425	6.509	1,30	6.424	-1,30
Inactive	12.489	12.410	-0,63	13.117	5,69
Occupied population according to position in the workforce (annual average, in thousands)					
Worker or employee of a particular company	5.534	5.975	7,96	5.930	-0,75
Government employee	1.057	1.093	3,40	1.069	-2,19
Domestic worker	865	879	1,61	820	-6,71
Self-employed	6.516	6.855	5,20	7.073	3,18
Boss or employer	825	819	-0,72	900	9,89
Unpaid family worker and others	1.822	1.846	1,31	1.786	-3,25

Source: DANE.

As it can be observed in Table 2, the GDP rose from 1,93% in 2002 to 4,02% in 2003. This fact had to have a favorable impact on employment, independent of if there was or was not a labor reform. This is precisely what happened, as an 4,52% increase in the number of people employed was registered, yet this did not lower the unemployment rate, which actually rose slightly by 0,62% during this time.

The labor market statistics in 2004 show a completely different tendency than that which we saw in 2003. First of all, although there was a significant drop in the unemployment rate, -3,85% as compared to 2003, only 111.000 jobs were created, representing a mere 0,63% in-

crease in the number of employed people. This indicator was below the indicators of economic growth (3,96%), of population growth (1,68%), and of growth of the working age population (2,15%), which explains that the labor market itself and certainly not the labor reform was not responsible for the lowering of the unemployment rate.

What happened, then, in the labor market which allows us to explain the lowering of the unemployment rate without the corresponding increase in the occupied population?

If in 2004, the unemployment rate dropped 3,85%, and the occupied population only increased 0,63%, the most reasonable explana-

tion can be found in the behavior of the inactive population, which from 2003 to 2004 increased by 707.000 people, who for diverse reasons – such as an increase in the number of students or an increase in the number of unemployed people who gave up on looking for a decent job – end up registered by the surveys in this occupational category.

Secondly, in 2004, all of the indicators that refer to workers in the formal sector that are covered by a legal contract are negative. The number of salaried workers decreased by 0,75%; government employees also decreased by 2,19%; and the same phenomenon occurred with domestic workers, whose number decreased by 6,71%. It can be assumed that the labor reform would fundamentally apply for the formal sector of the economy, helping to generate new jobs, or that its policies to promote employment among microenterprises and small and medium size businesses would be reflected in an increase in the working population covered by a formal work contract. However, this has not occurred, at least in 2004, after the economy recovered from the situa-

tion of recession that it experienced up until 2000.

Thirdly, in 2004, the only occupational categories which grew were those of “self-employed” workers (3,18%), the majority of which are found in the informal sector of the economy, unprotected by social protections and far from the notion of “decent work” promoted by the ILO. The category of “boss or employer” also grew by 9,89%, but this in many cases reflects not autonomous business owners capable of earning an income that would permit a decent standard of living, but informal workers dedicated to eking out a living, such as the owner of a tiny store, who would also respond to the surveys by saying that he is his own boss and employer.

In this way, the statistics that show what happened to employment in the manufacturing sector are very illustrative (see Table 3). The annual survey carried out by the DANE showed job growth at a mere 0,44%. However, the growth in actual production and in sales throughout the entire sector were 4,87% 3,54%, respectively.

Table 3: Variation in production, sales, and industrial employment
January-December 2004-2003

	Production ^a		Sales	Total Employment		
	Nominal	Real		Total	Permanent	Temp
a. Total with frequency	13,12	4,76	3,41	0,45	-1,94	4,04
b. Total without frequency	13,04	4,87	3,54	0,44	-1,96	4,05

Source: DANE.

The behavior of this sector clearly shows how the labor reform was completely inept in the generation of new jobs. With the increase in production and in sales, the employers of the sector optimized the use of existing capacity and increased on the job productivity. Here the supposed stimuli that the labor reform should have had to hire new workers did not work, since with the same workforce and the same existing capacity, higher levels of production and of sales were achieved. The employers should be asked how this greater amount of added value was shared out, and how this

bigger increase in productivity and of the wealth created in this sector corresponded to a real improvement in the standard of living and of work for the employees of this sector.

The annual manufacturing survey of the DANE also allows us to see the quality of employment being generated in this sector, which among other things, shows a tendency common to all sectors. As we showed, industrial employment grew by just 0,45%; of this total, the growth in temporary jobs was 4,04%, while permanent jobs decreased by 1,94%.

Table 4: Associated workers cooperatives registered in the Medellín Chamber of Commerce

Year	2001	2002	2003	2004 (through August)
Number	40	48	64	40

It can also be empirically observed how many companies are utilizing in a fraudulent way the associated workers cooperatives to subcontract workers and reduce labor costs. See for example what is happening in all of the companies of the Santodomingo group which produce beer – the majority of the workers with seniority were let go by diverse legal and illegal means, the unions were destroyed or reduced to the smallest level possible, the collective bargaining contract now no longer applies or applies for very few workers, and the majority of workers today are hired through associated workers cooperatives.

Should the Labor Reform Remain in Effect or Not?

The objectives which justified the passing of this law were those of “helping employment and increasing social protection,” in a context of high rates of unemployment and huge sectors of workers without social security coverage. As we have already shown, in the first year of the reform there was a 4,52% increase in occupied people, which did not lower the unemployment rate. However, this growth in occupied people was not a result of the labor reform, but of the economic recovery, as the 2004 results demonstrate to us.

In 2004, the employment statistics that refer to formal sector workers covered by legal

work contracts were negative, the only occupational categories that grew were those of “self-employed workers” and “boss or employer,” many of which correspond to informal sector workers.

On the other hand, the reform has not had a positive impact on the formalization of em-

ployment, which was one of its goals (see Table 5). The few increases seen in relation to affiliation to the social security system are related more to the recovery of the economy and the generation of employment that this recovery promotes, than with the labor reform itself.

Table 5. Affiliation to the social security system by employment categories in the thirteen metropolitan areas. Second semesters of 2002, 2003 and 2004

Employment category	% Afiliated health care (contributive regime)			% Afiliated pensions		
	April-june 2002	April-june 2003	April-june 2004	April-june 2002	April-june 2003	April-june 2004
A. Total workforce	61,4	62,3	63,8	34,3	34,8	37,2
1. Formal sector	88,1	87,9	89,4	67,7	68,0	70,4
2. Informal sector	43,6	44,4	44,8	11,9	11,7	12,6
B. Worker/salaried employee	76,4	77,9	79,1	57,2	57,7	60,7
1. Private sector	73,4	75,2	76,8	51,8	52,7	56,4
c. Up to 10 workers	49,0	51,9	51,5	20,6	20,0	22,7
d. 11 or more workers	88,7	88,9	90,6	71,4	72,1	74,8
2. Government employees	98,5	100,0	99,1	96,4	97,7	96,7

Source: Ongoing household survey in 13 metropolitan areas, second semester (with informal sector section). Taken from: “Impacto de la reforma laboral sobre la generación y calidad de empleo,” CIDE, 2005.

Regarding the quality of jobs that are being created, the report by the Superintendent of Banks on the level of faithfulness of the affiliates of pension funds is very illustrative – of the total affiliates, 49,9% are active and 50,1% are inactive. Inactive affiliates are classified as those who have not made a contribution in at least the last six months.⁷

The greater efficiency of the labor reform, and perhaps the only efficiency, has been in

the lowering of labor costs and in the greater impoverishment of Colombian workers.

In the report by the La Republica newspaper cited above, it is shown that according to the total number of affiliates to the obligatory pension plans, 84,5% earn less than two minimum wages, 9,7% earn between two and four minimum wages, and 5,8% earn more than four minimum wages.

7. La República, Thursday, November 11, 2004.

Table 6: Salaried and no-salaried workers by increments of the minimum wage (MW)
 Nacional total (in millions of people)

	Trimester III 1994				Trimester III 2000				Trimester III 2002			
	Salaried		Non-Salaried		Salaried		Non-Salaried		Salaried		Non-Salaried	
Total	9,40	100%	4,70	100%	8,50	100%	7,10	100%	7,40	100%	8,00	100%
Less than ½ MW	0,86	9,13	1,30	27,20	1,00	12,00	3,10	44,20	2,00	27,40	5,00	62,90
From ½ to less 1	2,00	21,30	1,00	20,70	1,70	20,40	1,60	22,90	1,30	18,00	1,50	18,90
From 1 to 1,5	3,00	31,80	0,73	15,40	3,00	36,20	0,88	12,40	2,20	30,60	0,53	6,80
From 1,5 to less than 2	1,20	13,20	0,41	8,60	0,93	11,10	0,47	6,60	0,55	7,50	0,33	4,20
Subtotal	7,13	75,50	3,41	72,07	6,76	79,70	6,15	86,10	6,19	83,50	7,44	92,80
From 2 to less than 3	1,10	11,60	0,52	11,00	0,72	8,50	0,32	4,50	0,51	6,80	0,21	2,60
From 3 to less than 5	0,75	8,00	0,40	8,40	0,60	7,00	0,34	4,90	0,43	5,90	2,00	2,40
Form 5 to less than 10	0,32	3,40	0,26	5,50	0,31	3,70	0,22	3,10	0,21	2,80	0,13	1,70
10 and higher	0,13	1,30	0,13	2,90	0,10	1,20	0,10	1,40	0,07	1,00	0,04	0,50

Source: CID Universidad Nacional 2003.

If we compare this information with what the CID of the Universidad Nacional released in 2003 (see Table 6), we find a deterioration of the wage levels of salaried workers. Actually, in the third semester of 2002, the percentage of salaried workers with earnings of less than two minimum wages was 83,5%, and as of September 30, 2004 this percentage was 84,5%. And the reason for this is clear – what the labor reform did was transfer resources from the pockets of salaried workers to the businessmen.

The result has been an aggravation of the problems of distribution of income, which place our country among those with the highest levels of inequality on the continent, as José Antonio Ocampo, Assistant Secretary of the

ONU for Social Issues indicated: “In Latin America, the only country, that by mixing indicators, clearly surpasses us is Brazil, which is one of the most unequal economies in the world. In these countries, the relationship between the income of the most wealthy 10% and the most poor 10% is a 30 to 40 times difference, while in an industrialized country, that relationship is a 7 to 8 times difference”.⁸

But in addition, the negative way in which the workers incomes were affected by the labor reform also has a negative effect on household spending, making the formation of a dynamic internal market that can increase economic growth to the levels that effectively permit job creation more difficult.

8. José Antonio Ocampo Gaviria, “Desarrollo humano, un desafío para el milenio”. Observar N° 13, December 2004.

Escuela Nacional Sindical
Calle 51 N° 55-78
Tel: 513 31 00 Fax: 512 23 30
Correo electrónico: coddhlab@ens.org.co
Web: ens.org.co



UNION EUROPEA

PROGRAMA ANDINO
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
2002-2005

